SOSTENER LA VIDA DENTRO Y FUERA DE LAS CÁRCELES:

Impacto de la crisis carcelaria en los derechos de las familias de personas privadas de libertad en ecuador



CDH
COMITÉ PERMANENTE POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

SOSTENER LA VIDA DENTRO Y FUERA DE LAS CÁRCELES:

Impacto de la crisis carcelaria en los derechos de las familias de personas privadas de libertad en Ecuador

CDH
COMITE PERMANENTE
POR LA DEFENSA DE LOS
DERECHOS HUMANOS

Presidente:
Lcdo. Billy Navarrete Benavidez
Director Ejecutivo:
Lcdo. Paúl Murillo Ontaneda
Coordinador de Área de Protección a víctimas:
Abg. Fernando Bastias Robayo.
Investigadora:
Msc. Marilyn Urresto Villegas
Revisión y sistematización de datos:
Equipo CDH: Lcda. Maria Luisa Pazmiño
Asistentes de investigación: Annika Kapp, Valeria Mite, Daniela Masache, Jhon Murdy.
Diseño:
Andrés Loor
Fotografía
Andrés Loor, Billy Navarrete

Agradecimiento:
Agradecemos profundamente a los distintos Comités de Familiares que se han organizado para exigir verdad, justicia y reparación por los crímenes cometidos por los últimos gobiernos en el Ecuador contra las personas privadas de libertad y sus familias, en especial al Comité de Familiares por una Vida Digna dentro y Fuerza de las Cárceles, (COFAVID)

Dedicatoria:
A las familias de las personas privadas de libertad en Ecuador, y de manera especial a las madres, hijas, esposas y hermanas que históricamente, han sostenido la denuncia pública frente a la incoherencia y el colapso del sistema de rehabilitación social. Han sido ellas quienes, en medio del estigma y la precariedad, han visibilizado que las formas en que el Estado gestiona el conflicto no reducen la violencia, sino que la reproducen; que la cárcel, lejos de rehabilitar, profundiza el daño a personas, familias y comunidades enteras. Que sus voces continúen interpelando una gestión penitenciaria atravesada por prácticas necropolíticas, donde la administración de la vida y la muerte se ejerce desde el abandono y desde la voluntad de producir violencia. Que la historia registre su persistencia no como un gesto marginal, sino como un acto de defensa sostenida de la dignidad humana. Porque han sido -y son- defensoras de derechos humanos, aun cuando el Estado no las nombre como tales.

El uso comercial y la reimpresión de todos los materiales editados y publicados por la Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) están prohibidos sin previa autorización escrita de la FES.

Las opiniones expresadas en esta publicación no representan necesariamente las de la Friedrich-Ebert-Stiftung.

ÍNDICE

1.INTRODUCCIÓN.....7

2.METODOLOGÍA.....9

3.1. FUENTES Y HERRAMIENTAS DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN.....10
A) REVISIÓN DOCUMENTAL Y BIBLIOGRÁFICA:.....10
B) REVISIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE BASE DE DATOS DE ATENCIÓN A FAMILIARES DE PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD.....10
C) ENTREVISTAS SEMIESTRUCTURADAS A FAMILIARES DE PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD.....11
3.2. CONSIDERACIONES ÉTICAS, CONFIDENCIALIDAD Y NO REVICTIMIZACIÓN.....11
3.3. LIMITACIONES DEL ESTUDIO.....12

3. OBLIGACIONES DEL ESTADO CON FAMILIARES DE PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD.....12

4. SITUACIÓN CARCELARIA EN ECUADOR: VIOLENCIA, MILITARIZACIÓN Y DESHUMANIZACIÓN.....16
5.1. HACINAMIENTO Y GIRO PUNITIVO: CONDICIONES ESTRUCTURALES DE LA CRISIS.....17
5.2. REFORMA PENITENCIARIA DE 2014.....18
5.3. DEBILITAMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO EN ECUADOR.....19
5.4. ESCALADA DE VIOLENCIA Y COLAPSO DEL CONTROL ESTATAL (2018–2024).....20
5.5. DECLARATORIA DEL CONFLICTO INTERNO ARMADO Y LA MILITARIZACIÓN.....20

5 .FAMILIAS DE PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD: CARACTERIZACIÓN Y DESIGUALDADES DE GÉNERO.....24

6. EXTENSIÓN DEL CASTIGO: COSTOS E IMPACTOS DE LA CRISIS CARCELARIA SOBRE FAMILIARES DE PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD.....32
7.1. IMPACTO EMOCIONAL Y PSICOLÓGICO.....32
7.2. IMPACTOS ECONÓMICOS.....35
7.3. IMPACTOS SOCIALES.....40

7. VULNERACIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y VIOLENCIA DE GÉNERO.....44
8.1. VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS FAMILIAS.....47

8. CONCLUSIONES.....50

9. RECOMENDACIONES.....53



SOSTENER LA VIDA DENTRO Y FUERA DE LAS CÁRCELES:

Impacto de la crisis carcelaria en los derechos de las familias de personas privadas de libertad en Ecuador

1. Introducción

Ecuador atraviesa la peor crisis carcelaria de su historia reciente. Desde 2018, y con especial gravedad entre el 2021 y el 2025, los centros de privación de libertad se han convertido en escenarios de masacres, torturas, hacinamiento extremo, militarización y abandono estatal. La intervención de las Fuerzas Armadas, presentada como respuesta a la violencia desde enero de 2024[1], no ha logrado frenar las muertes dentro de las cárceles; por el contrario, las ha agravado. Entre ellas destacan la desnutrición, la falta de atención médica, la propagación de tuberculosis, la violencia sexual y el encierro prolongado sin acceso regular a agua, alimentación adecuada ni comunicación con el exterior. La respuesta estatal, lejos de asumir la magnitud del problema, ha sido adversa, limitándose al no reconocimiento de la crisis penitenciaria y ha habilitado prácticas de restricción y vulneración sistemática de derechos humanos[2].

Esta crisis no se limita al sistema penitenciario, se extiende extramuros y afecta de forma directa a las familias, que viven en incertidumbre constante sobre el paradero, la salud y la vida de sus seres queridos. En este contexto, el encarcelamiento opera como un mecanismo que castiga no solo a quienes están dentro, sino también a quienes están fuera, reproduciendo desigualdades, pobreza y alimentando violencias estructurales. Este impacto recae de manera desproporcionada sobre las mujeres, quienes asumen el sostenimiento material y emocional de la vida familiar en ausencia de una política estatal integral de recuperación del sistema penitenciario y de rehabilitación social.

Los efectos de la crisis carcelaria sobre las familias son múltiples y profundos: desintegración familiar a partir de la detención; reestructuración de roles (especialmente para las mujeres) que asumen nuevas responsabilidades tanto en el hogar como en el cuidado de la persona privada de libertad;

1. Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, Monitoreo de cárceles ocupadas por militares. Versión 2.5.2024, 27 de enero de 2024, https://www.cdh.org.ec/ultimos-pronunciamientos/622-monitoreo-de-carceles-ocupadas-por-militares-21-22-enero-2023.html.
2. Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos y Observatorio Mundial Contra la Tortura (OMCT), "Ecuador: Crisis sanitaria en los centros penitenciarios y militarización continua," 2025, https://www.omct.org/es/recursos/reportes/ecuador-militarizaci%C3%B3n-continua-y-crisis-sanitaria-en-los-centros-penitenciarios.

pérdida de ingresos y sobrecarga económica asociada a la manutención del familiar encarcelado; afectaciones a la salud física y mental; ruptura de proyectos de vida personales y familiares; estigmatización social; desplazamientos forzados; y dificultades en la trayectoria educativa de niñas, niños y adolescentes[3].

A estas afectaciones se suma un patrón persistente de discriminación y estigmatización que vulnera derechos y expulsa a las familias del debate público sobre seguridad y rehabilitación social. Su lugar es desplazado por narrativas centradas exclusivamente en el crimen organizado, pese a que las familias constituyen un espacio clave para la prevención, el sostenimiento de vínculos y los procesos de reintegración social. En la práctica, son las mujeres familiares quienes terminan proveyendo a sus seres queridos de bienes básicos indispensables para la subsistencia: alimentos, medicinas, artículos de higiene y otros insumos, que el Estado debería garantizar, pero que son negados o condicionados.

Este informe examina el impacto de la crisis carcelaria y de la militarización de los centros de privación de libertad sobre familiares de personas privadas de libertad. El foco no se limita a las condiciones intramuros, sino que va a un campo menos explorado y analiza cómo la pena se expande y atraviesa todas las esferas de la vida de mujeres cuidadoras, en un contexto donde la violencia carcelaria forma parte de una estructura más amplia de desigualdad, estigmatización y abandono estatal.



Foto: Andrés Loor

3. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Los derechos de familiares y personas con vínculos afectivos de las privadas de libertad: Resolución No. 2/25, Documento No. 146, 24 de julio de 2025, Organización de los Estados Americanos (OAS), https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/2025/resolucion_ppl-es.pdf.

2. Metodología

El presente informe se elaboró mediante una estrategia de investigación cualitativa, con un enfoque transversal de derechos humanos y de género. Este abordaje permitió aproximarse a la complejidad de las realidades vividas por familiares de personas privadas de libertad, un grupo históricamente invisibilizado y estigmatizado, y comprender tanto los impactos psicosociales de la crisis carcelaria como los significados que las familias atribuyen a sus experiencias de encarcelamiento, violencia institucional y criminalización.

El estudio se desarrolló a partir del proceso sostenido de acompañamiento psicosocial y legal que realizó el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) a familiares de personas privadas de libertad durante el período enero–diciembre de 2024. En este marco, el informe se inscribe en el objetivo general de reducir los efectos de la estigmatización y fortalecer la defensa de los derechos humanos frente a graves violaciones cometidas en el contexto de la crisis carcelaria y de seguridad en Ecuador.

El universo de análisis corresponde a familiares de personas privadas de libertad que acudieron al CDH para atención legal y/o psicosocial durante el periodo señalado. Para efectos del informe, se consideró como *"familiar"* a madres, parejas, hijas/os, hermanas/os u otros vínculos de cuidado reconocidos por las propias participantes. La evidencia presentada refleja, por tanto, experiencias de familias que buscaron acompañamiento institucional, sin pretender representar estadísticamente al conjunto de familiares del país. En cuanto al alcance territorial e institucional, los casos analizados se vinculan principalmente con la ciudad de Guayaquil y al Centro de Privación de Libertad Guayas No. 1 (Penitenciaría del Litoral), conforme a la demanda de atención recibida por el CDH en 2024.

El énfasis en el CPL Guayas N.° 1 (Penitenciaría del Litoral) responde a criterios de relevancia empírica y magnitud: se trata del centro penitenciario más grande del país que ha concentrado episodios recurrentes y de alta letalidad en el marco de la crisis carcelaria y registra niveles especialmente altos de hacinamiento. Adicionalmente, es el centro desde el cual el CDH ha recibido el mayor volumen de denuncias y solicitudes de acompañamiento, por lo que constituye un caso clave para documentar patrones de vulneración y deterioro de condiciones de detención.

Desde esta perspectiva, el informe busca visibilizar experiencias situadas para: (i) identificar patrones de vulneración de derechos, (ii) documentar estrategias de resistencia y sostenimiento de la vida impulsadas por las familias, y (iii) sistematizar sus demandas de justicia, verdad y reconocimiento.

3.1. Fuentes y herramientas de levantamiento de información

El análisis se construyó a partir de tres fuentes principales, articuladas mediante herramientas complementarias:

a) Revisión documental y bibliográfica:

Se revisaron informes de organismos internacionales y nacionales de derechos humanos, así como publicaciones de organizaciones que acompañan a familiares de personas privadas de libertad. También se incorporó bibliografía académica especializada y artículos de prensa relevantes. Esta revisión permitió contextualizar la crisis carcelaria, analizar el marco de políticas de seguridad implementadas y ubicar la experiencia de los familiares en un horizonte más amplio de obligaciones estatales y estándares de derechos humanos.

b) Revisión y sistematización de base de datos de atención a familiares de personas privadas de libertad

Se sistematizó la información de un total de 201 fichas de atención y registros asociados al acompañamiento legal y psicosocial brindado por el CDH a familiares de personas privadas de libertad entre enero y diciembre de 2024. El análisis de esta base permitió identificar tendencias, perfiles sociodemográficos y principales vulneraciones reportadas, funcionando como una línea de base empírica para el desarrollo del informe. La base incluyó variables como edad, género, ciudad de residencia, parentesco con la persona privada de libertad, tipo de vulneración reportada y afectaciones psicosociales.



Foto: Andrés Loor

c) Entrevistas semiestructuradas a familiares de personas privadas de libertad

Se realizaron 10 entrevistas a familiares con distintos perfiles, con el objetivo de reconstruir experiencias, impactos y trayectorias de afrontamiento frente al encarcelamiento. La selección se realizó mediante muestreo intencional, priorizando a familiares que mantenían un proceso de acompañamiento sostenido con el CDH, lo que permitió realizar las entrevistas en un marco de confianza, contención y seguimiento. Esta decisión respondió también a consideraciones éticas y de seguridad ya que una convocatoria más amplia podía generar expectativas de atención o intervención institucional que el informe no necesariamente podía satisfacer, y podría incrementar la exposición y los riesgos tanto para las familias participantes como para el propio CDH en el contexto de crisis de seguridad. Dentro de este marco acotado, se procuró incorporar diversidad de perfiles según el tipo de vínculo, vulneración de derechos, tiempo de encarcelamiento del familiar, con el fin de captar variaciones relevantes en las experiencias. En particular, se desarrollaron entrevistas en profundidad a mujeres familiares, centradas en:

- Relatos sobre tortura, malos tratos y violencia institucional;
- Impactos emocionales, económicos y de salud;
- Estrategias de cuidado, resistencia y organización.

Las entrevistas se realizaron en modalidad presencial y virtual, con una duración aproximada de 45-60 minutos, y fueron registradas mediante audio. De manera complementaria, se incorporaron entrevistas al equipo de acompañamiento legal y psicosocial del CDH, con el fin de triangular hallazgos, identificar patrones recurrentes desde la práctica cotidiana de atención y fortalecer la consistencia analítica del informe.

3.2. Consideraciones éticas, confidencialidad y no revictimización

En conjunto, este informe se elaboró con el propósito de visibilizar la situación de las familiares de personas privadas de libertad, ampliar el conocimiento público y especializado sobre los impactos de la crisis carcelaria y aportar recomendaciones orientadas a fortalecer la política pública de rehabilitación social desde un enfoque de derechos humanos y de género. El levantamiento y tratamiento de la información se realizó de forma cuidadosa, resguardando la

identidad de las informantes mediante medidas de confidencialidad y anonimización de datos, y priorizando criterios éticos para prevenir riesgos y evitar la revictimización.

Adicionalmente, en la presentación de hallazgos se evitó incluir información que pudiera permitir la identificación directa o indirecta de las personas participantes.

3.3. Limitaciones del estudio

Dado que las fuentes empíricas se basan en los registros de atención del CDH y en entrevistas a familiares que acudieron a la organización, los hallazgos no buscan representar estadísticamente al conjunto de familiares de personas privadas de libertad en Ecuador, sino documentar patrones de vulneración y afectaciones a partir de evidencia situada y verificable en el marco del acompañamiento institucional. En un contexto de crisis, militarización y temor a denunciar, es posible que exista subregistro de casos y que ciertas vulneraciones no sean reportadas por riesgos percibidos o por barreras de acceso.

3. Obligaciones del Estado con familiares de personas privadas de libertad

Es indiscutible que los familiares de las personas privadas de libertad son titulares plenos de todos los derechos consagrados en la Constitución de la República del Ecuador, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y en los demás instrumentos internacionales de protección. Sin embargo, existen contextos específicos, especialmente aquellos marcados por violaciones graves de derechos humanos, en los que surgen obligaciones diferenciadas y concretas del Estado respecto de los familiares de las personas detenidas.

En esta línea, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que ciertas omisiones estatales pueden constituir violaciones autónomas de derechos en perjuicio de los familiares, independientemente de las violaciones sufridas directamente por la persona privada de libertad o la víctima *"directa"*. Así,

por ejemplo, en casos de muerte o desaparición de personas bajo custodia estatal, la falta de información oportuna a los familiares, la ausencia de esfuerzos diligentes para localizar a la persona, notificar el fallecimiento, entregar los restos mortales o informar sobre el curso de las investigaciones, puede vulnerar derechos propios de los familiares, configurando tratos crueles, inhumanos o degradantes conforme al artículo 5 de la CADH. En palabras del Tribunal, estas omisiones impiden a los familiares realizar ritos funerarios conforme a sus convicciones y provocan sentimientos profundos de inseguridad, incertidumbre e impotencia[4].

La jurisprudencia interamericana ha reconocido que la afectación a la integridad psíquica y moral de los familiares no solo deriva del sufrimiento por la situación de sus seres queridos, sino también de las respuestas estatales inadecuadas, como la negación de justicia, la impunidad prolongada o la falta de esclarecimiento. Estos factores no sólo perpetúan el daño, sino que lo profundizan al mantener a los familiares en una situación constante de angustia, frustración y revictimización. Este daño, además, ha sido reconocido por la Corte como una violación autónoma al artículo 5 de la CADH, no como daño colateral[5].

Para determinar la existencia de una violación a los derechos de los familiares, el Tribunal ha establecido una serie de criterios orientadores que permiten evaluar el impacto individual de los hechos: la cercanía del vínculo familiar, la relación previa con la persona detenida o fallecida, el grado de exposición del familiar a los hechos, su participación en la búsqueda de justicia y verdad, y la calidad de la respuesta estatal. Tales elementos permiten una valoración contextualizada del sufrimiento padecido, con miras a reconocer violaciones a la integridad personal de los familiares conforme al artículo 5 de la CADH[6].

Partiendo del reconocimiento de estas obligaciones diferenciadas frente a familiares de víctimas de violaciones a derechos humanos, cabe preguntarse si también emergen derechos específicos derivados de la sola condición de ser familiar de una persona privada de

4. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Niños de la Calle (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala, párr. 173, sentencia del 19 de noviembre de 1999.
5. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Tibi vs. Ecuador, párr. 160, sentencia del 7 de septiembre de 2004.
6. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Bámaca Velásquez vs. Guatemala, párr. 163, sentencia del 25 de noviembre de 2000.

libertad, incluso fuera de contextos de desaparición o muerte. En este punto, es fundamental recordar que la privación de libertad es una restricción legítima del derecho a la libertad personal, pero no puede suponer una afectación automática y desproporcionada a terceros, especialmente a los familiares.

Uno de los principios estructurales del derecho penal moderno y del sistema penitenciario es el de personalidad de la pena, también denominado prohibición de trascendencia. Este principio establece que las consecuencias penales de un delito solo pueden recaer sobre quien lo ha cometido, no pudiendo extenderse a personas distintas del condenado. Por tanto, cualquier efecto negativo del encarcelamiento que afecte a sus familiares debe ser analizado a la luz de este principio, evitando su normalización o justificación institucional.

Este principio representa un momento de transición histórica entre las ideas del derecho penal bajo la visión del retribucionismo absoluto y las ideas del utilitarismo penal. Para el pensamiento absolutista, la soberanía era entendida como un poder único otorgado por la divinidad a los príncipes cristianos, lo que justificaba un derecho a castigar (ius puniendi) de naturaleza coercitiva y retributiva, es decir, existió una justificación de trasladar las consecuencias del cometimiento de infracciones a parientes cercanos con la finalidad de dar un ejemplo. En contraste, desde la perspectiva ilustrada, dicho poder solo podía fundamentar racionalmente un ius puniendi limitado, de carácter preventivo y moderado, promoviendo así, un principio de legalidad, de inocencia y de culpabilidad[7]. Esto se fundamentó en la siguiente idea:

Si las leyes penales no eran sino el precio que cada ciudadano había de pagar por la defensa de su libertad y seguridad en la comunidad política constituida, las sanciones establecidas en ellas por el poder público debían guardar una justa proporción con el peligro que el delito supusiera para la ciudadanía, ya que nadie cedería voluntariamente al estado una mayor injerencia en sus derechos previos o naturales.

7. Ramos Vásquez, El principio de personalidad de la pena en el Derecho histórico castellano, en Revista de la Inquisición, n.º 14 (2005): 245–278, 268.

Desde esta base, es razonable concluir que el Estado tiene la obligación de evitar que los efectos colaterales de la privación de libertad se proyecten injustificadamente sobre familiares, especialmente en lo que respecta a su integridad personal, su derecho a mantener relaciones familiares, su acceso a información sobre las condiciones de detención, entre otros aspectos. De lo contrario, se estaría normalizando una forma contemporánea de trascendencia de la pena, violando no solo el principio de legalidad penal, sino también el contenido sustantivo de los derechos de los familiares.

Esta noción encuentra respaldo en los recientes estándares desarrollados por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En particular, la Resolución 99/2025 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), relativa a las personas privadas de libertad del CPL Guayas N.° 1, no solo exige al Estado garantizar condiciones dignas bajo custodia, sino que subraya la obligación de asegurar el mantenimiento del vínculo familiar, el acceso a información adecuada y oportuna y la protección frente a tratos crueles o degradantes que afecten también a los entornos cercanos.

La CIDH reconoce que la falta de información, las restricciones arbitrarias al contacto y las condiciones materiales incompatibles con la dignidad humana producen un impacto directo sobre las familias, quienes son titulares plenos de derechos y no pueden ser sometidas a consecuencias derivadas de la privación de libertad de un tercero.



Foto: Andrés Loor

Desde esta perspectiva, los familiares de personas privadas de libertad no son actores accesorios del sistema penitenciario, sino sujetos de derechos que deben recibir información clara sobre el estado de salud y paradero de sus seres queridos, contar con condiciones adecuadas para el ejercicio de visitas y no ser expuestos a humillaciones, discriminación o prácticas degradantes como requisito para mantener el vínculo. La Resolución reafirma que el Estado tiene la obligación de evitar que el encierro se traduzca en una afectación indirecta y desproporcionada sobre terceros, especialmente cuando existen contextos de crisis humanitaria y restricciones estructurales dentro de los centros penitenciarios[8].

4. Situación carcelaria en Ecuador: violencia, militarización y deshumanización

La crisis carcelaria en Ecuador no es reciente, Es el resultado acumulado de decisiones estatales que, sobre un sistema históricamente precarizado, debilitaron la capacidad de control institucional y facilitaron el asentamiento de estructuras criminales que disputan y ejercen control sobre la vida de las personas privadas de libertad y sobre dinámicas centrales del sistema penitenciario.

A continuación, el análisis se organiza en cinco puntos clave para comprender de forma cronológica la crisis del sistema penitenciario en Ecuador. Primero, se describe el carácter estructural de la crisis a partir del hacinamiento y el giro punitivo. Segundo, se revisan los principales hitos de la política penitenciaria reciente, incluyendo la reforma de 2014 y sus efectos. Tercero, se analiza el debilitamiento institucional y la pérdida de rectoría estatal en la gestión penitenciaria desde 2017, agravada durante la pandemia. Cuarto, se examina la escalada de violencia intramuros y el colapso progresivo del control estatal que derivó en un patrón de masacres carcelarias entre 2018 y 2024. Quinto, se aborda el ciclo más reciente marcado por la militarización penitenciaria y el agravamiento de condiciones materiales de detención, con énfasis en la crisis sanitaria y humanitaria del CPL Guayas N°1.

8. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Resolución 99/2025: Medidas cautelares a favor de las personas privadas de libertad del CPL Guayas N.° 1 respecto de Ecuador, Organización de los Estados Americanos, 2025, https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/2025/Resolucion_PPL-ES.pdf.

5.1. Hacinamiento y giro punitivo: condiciones estructurales de la crisis

Un rasgo persistente de esta crisis ha sido el hacinamiento, factor estructural que se agudiza en períodos de crisis de seguridad. Su intensificación se vincula, entre otros elementos, al giro punitivo consolidado desde los años noventa, en el marco de la estrategia regional de *"guerra contra las drogas",* que amplió el uso del encarcelamiento como respuesta principal frente a la cuestión criminal (Núñez 2007; Kaleidos 2021). En Ecuador, estas políticas incidieron en el crecimiento sostenido de la población penitenciaria mediante el endurecimiento de penas, la expansión de la prisión preventiva y el debilitamiento de mecanismos de excarcelación y beneficios penitenciarios (Núñez 2007; Paladines 2016). Como resultado, el sistema ha operado de manera recurrente por encima de su capacidad real, afectando de forma directa las condiciones para el cumplimiento de los fines de rehabilitación y reinserción social. En este contexto, el hacinamiento y la precarización redujeron la capacidad estatal de control efectivo y garantía de derechos, habilitando formas de gobernanza criminal al interior de los centros penitenciarios.



Foto: Billy Navarrete

5.2. Reforma penitenciaria de 2014

En 2014, el Estado impulsó una reforma penitenciaria que buscó, al menos en el plano normativo, disminuir la población penitenciaria y el uso del encarcelamiento. Un hito de ese giro fue la aprobación del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que introdujo criterios de proporcionalidad en materia de drogas, considerando cantidades y diferenciando perfiles de involucramiento, lo que habilitó la aplicación retroactiva del código bajo el principio de favorabilidad. Como resultado, se registró la liberación de más de 2.200 personas privadas de libertad tras la adopción del COIP, con efectos particularmente relevantes para población encarcelada por delitos de drogas[9].

En paralelo, la reforma se propuso fortalecer un modelo de rehabilitación y progresividad para *"romper el ciclo"* de encarcelamiento, puesta en libertad y reincidencia. En este esquema, las personas privadas de libertad podían avanzar por distintos regímenes de seguridad y, en función del cumplimiento de programas (trabajo, educación, cultura y deporte) y de evaluaciones institucionales, acceder a beneficios como la libertad condicional tras el cumplimiento de un porcentaje de la pena, conforme a la regulación vigente[10].

No obstante, el cambio no fue únicamente normativo; También estuvo acompañado de un proceso de modernización orientado a enfrentar el hacinamiento mediante la construcción de mega complejos carcelarios en las provincias de Guayas, Cotopaxi y Azuay. Este modelo se asoció a lógicas de alta seguridad, con mayor aislamiento, restricciones de visitas y distanciamiento del núcleo familiar, con impactos relevantes en el vínculo familiar y en el acceso a redes de cuidado[11].

En la práctica, el proceso mostró fallas de implementación como dificultades para sostener el modelo rehabilitador en el tiempo, déficits de capacidades y personal, y debilidades en los sistemas de información y seguimiento. Así, aunque la reforma implicó una expansión de infraestructura y una reorganización del control penitenciario, mantuvo un énfasis predominantemente punitivo y no resolvió de fondo la presión sobre servicios, salud, alimentación y garantías de vida dentro de los centros penitenciarios.

9. James Bargent, K. Noroña y M. Charles, El sistema penitenciario en Ecuador: historia y retos de un epicentro del crimen (Washington, DC: Insight Crime, diciembre de 2024), https://insightcrime.org/wp-content/uploads/2024/12/El-sistema-penitenciario-en-Ecuador-historia-y-retos-de-un-epicentro-del-crimennSight-Crime-Dec-2024VersionEspanol.pdf

10. Kaleidos – Centro de Etnografía Interdisciplinaria, Diagnóstico del Sistema Penitenciario del Ecuador (Quito: Kaleidos/UDLA, octubre 2021), https://www.kaleidos.ec/wp-content/uploads/2021/10/Diagnostico_Sistema_Penitenciario_Ecuador_Kaleidos_2021.pdf.

11. Daniel Pontón, Las nuevas cárceles del Ecuador: un ecosistema para la reproducción del crimen complejo (Quito: FLACSO Ecuador, 2022), https://www.flacsoandes.edu.ec/sites/default/files/%25f/agora/files/FA-AGORA-Ponton-2022.pdf.

Andrea Aguirre Salas, Typhaine Léon y Nadia Ribadeneira González, "Sistema penitenciario y población penalizada durante la Revolución Ciudadana (2007-2017)," URVIO. Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad 27 (mayo-agosto 2020): 94-110, https://revistas.flacsoandes.edu.ec/urvio/article/view/4303/3387.

5.3. Debilitamiento del sistema penitenciario en Ecuador

A partir de 2017, se registró un proceso de debilitamiento institucional en la gestión penitenciaria acompañado por recortes presupuestarios para el sistema penitenciario, rotación de autoridades y reformas institucionales que afectaron la capacidad estatal de gestión. En paralelo, se configuró la política de seguridad e inteligencia policial en el marco de estrategias asociadas nuevamente a la *"lucha contra las drogas",* con énfasis en la cooperación internacional.

A finales de 2018 se eliminó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y se crearon dos entidades: la Secretaría de Derechos Humanos y el Servicio de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI). Este último quedó a cargo de la administración penitenciaria, pero al constituirse como un servicio, y no como un ministerio, presenta limitaciones en términos de rectoría, capacidad de coordinación interinstitucional y presencia territorial[12]. En esa línea, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe sobre la situación carcelaria en Ecuador, señaló que las transformaciones institucionales de los últimos años no resultaron adecuadas y contribuyeron a un proceso sistemático de desinstitucionalización del sistema penitenciario, favoreciendo escenarios de crisis[13].

Este debilitamiento institucional se profundizó con la reducción sostenida de recursos para atender la cuestión penitenciaria. La falta de presupuesto y capacidades operativas limitó la provisión de servicios básicos y la supervisión efectiva al interior de los centros, abriendo condiciones para el incremento de economías ilegales, prácticas de corrupción y consolidación de estructuras criminales con mayor poder de control, en un contexto de violencia en ascenso.

Durante la pandemia, el deterioro se agudizó. En 2020 se reportó un recorte del 85% del presupuesto destinado a inversión en los centros de privación de libertad, dejando a las personas privadas de libertad en un escenario de desprotección frente a la superposición de dos crisis: la sanitaria y la penitenciaría[14].

12. Jorge Vicente Paladines, "Cárcel y drogas en Ecuador: el castigo de los más débiles," Informe Ecuador, Revista Pensamiento Penal, 5 de diciembre de 2016, https://www.pensamientopenal.com.ar/doctrina/44525-carcel-y-drogas-ecuador-castigo-mas-debiles.

13.Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Personas privadas de libertad en Ecuador, aprobado el 21 de febrero de 2022, Organización de los Estados Americanos (OEA), https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/informe-ppl-ecuador_vf.pdf.

14. Kaleidos – Centro de Etnografía Interdisciplinaria, Diagnóstico del sistema penitenciario del Ecuador (Quito: Kaleidos/UDLA, octubre de 2021), https://www.kaleidos.ec/wp-content/uploads/2021/10/Diagnostico_Sistema_Penitenciario_Ecuador_Kaleidos_2021.pdf.



Foto: Billy Navarrete

5.4. Escalada de violencia y colapso del control estatal (2018-2024)

En ese marco de debilitamiento institucional, y con la instalación de estructuras criminales como operadores de facto de la gobernanza penitenciaria, se consolidaron dinámicas de autogobierno, corrupción y expansión de economías ilegales al interior de los centros, con impactos directos en la seguridad, la integridad personal y el acceso a condiciones básicas de vida (Pontón 2022). Este deterioro acumulado derivó en un colapso progresivo del control estatal y en una escalada de violencia intramuros que, entre 2018 y 2024, se expresó en motines y enfrentamientos de alcance nacional, concentrados especialmente en la Penitenciaría del Litoral. La recurrencia y magnitud de estos episodios configuraron un patrón de masacres carcelarias en los principales centros penitenciarios del país, con un saldo de más de 680 muertes, evidenciando la incapacidad del Estado para cumplir su deber de garantía sobre las personas privadas de libertad bajo su custodia[15].

5.5. Declaratoria del conflicto interno armado y la militarización

Durante el desarrollo de las masacres carcelarias, los distintos gobiernos posicionaron la militarización de los centros penitenciarios como una herramienta central para recuperar el control estatal sobre estos espacios. No obstante, en el mismo período se registraron al menos diez estados de excepción decretados de manera paralela a los enfrentamientos, lo que evidencia que dicha estrategia no logró contener la escalada de violencia ni restablecer condiciones sostenidas de gobernabilidad penitenciaria[16]. La reiteración de

15. Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), Monitoreo de cárceles ocupadas por militares (2024), https://www.cdh.org.ec/ultimos-pronunciamientos/622-monitoreo-de-carceles-ocupadas-por-militares-21-22-enero-2023.html.

16. Fernando Bastias Robayo, Las masacres carcelarias del Ecuador (2018-2024) como violaciones de Derechos Humanos: responsabilidad internacional del Estado ecuatoriano y medidas de reparación integral, Tesis de Maestría en Derecho Constitucional, Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, 2025, párr. 24, http://hdl.handle.net/10644/10947.

medidas extraordinarias sugiere más bien una respuesta reactiva y de corto plazo, que consolidó un enfoque de seguridad basado en la excepcionalidad, sin abordar los factores estructurales que sostienen la crisis carcelaria.

Tras la declaratoria de conflicto armado interno en enero de 2024 por el presidente Daniel Noboa y la vigencia del decreto ejecutivo 218[17], la respuesta estatal profundizó la militarización de los centros penitenciarios como estrategia para recuperar el orden y el control carcelario. Este viraje hacia un enfoque marcadamente securitista inauguró un nuevo ciclo de violencias y vulneraciones de derechos humanos, traducido en el deterioro de las condiciones materiales de detención y en impactos directos tanto para las personas privadas de libertad como para sus redes familiares.

La medida implicó trasladar el liderazgo de la seguridad intramuros a las Fuerzas Armadas, ampliando su margen de intervención en espacios que previamente estaban bajo gestión civil. Con ello, se consolidó una presencia militar sostenida a lo largo de 2024 que, en la práctica, ha tendido a desbordar el carácter excepcional de la medida, extendiéndose más allá de los límites de temporalidad y proporcionalidad que deberían regir este tipo de disposiciones.

La ocupación militar ha estado acompañada de prácticas de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes: golpes, encierro prolongado, desnudamientos forzados y uso de gases en espacios cerrados. El monitoreo del CDH y las denuncias de familiares han descrito carencias de agua, alimentos y medicinas bajo control militar, así como aislamiento prolongado. De este modo, el régimen de encierro extendido, la suspensión de visitas y la restricción del contacto con el exterior han ido sustituyendo la lógica penitenciaria por una lógica de ocupación.

Además, la conducción operativa por militares, sin formación penitenciaria ni manejo de protocolos clínicos, educativos y de gestión, ha implicado suspensión de programas, falta de derivaciones médicas oportunas, desabastecimiento o raciones insuficientes y ausencia de registros trazables de entrega de medicación y dietas.

Para 2025, el hacinamiento se mantiene como un problema estructural. Registros oficiales reportan que la población penitenciaria

17. El Decreto Ejecutivo No. 218 reconoce la persistencia de un conflicto armado interno en Ecuador atribuido a grupos armados organizados y dispone la continuidad de las operaciones de Fuerzas Armadas y Policía Nacional para neutralizarlos. Bajo este marco, el decreto ejecutivo traslada el lidezgado de Fuerzas Armadas internamente en los centros carcelarios.

alcanzó 36.404 personas privadas de libertad (corte agosto 2025), frente a una capacidad efectiva de 26.818 plazas, lo que implica un déficit aproximado de 9.350 plazas y una tasa de hacinamiento nacional cercana al 34,86%[18]. En este marco, además de la violencia vinculada a disputas criminales, se consolidó una crisis de salud, alimentación e integridad personal particularmente grave en el CPL Guayas N.° 1 (Penitenciaría del Litoral), que en 2025 se expresó en tres factores críticos: tuberculosis, deterioro alimentario y denuncias de malos tratos y tortura.

En relación con la tuberculosis (TB), que se ha configurado como un riesgo epidemiológico por las condiciones de hacinamiento, el no aislamiento de los reos, mala alimentación y condiciones de insalubridad[19], que no afecta solo a las personas privadas de libertad, sino que se extiende a funcionarios del sistema penitenciario, personal médico y familiares. En marzo de 2025 el Ministerio de Salud Pública reconoció 1.115 casos de TB en tratamiento a escala nacional y 565 personas privadas de libertad en tratamiento en el CPL Guayas N.° 1, aunque negó oficialmente fallecimientos por TB en los centros. Este posicionamiento ha sido cuestionado por organizaciones y familiares, que han reportado barreras de acceso a atención, discontinuidades en tratamientos y condiciones materiales de higiene, ventilación y alimentación incompatibles con un control epidemiológico efectivo[20].

En cuanto a la dimensión alimentaria, organizaciones y mecanismos de derechos humanos han alertado sobre la degradación sostenida de la calidad y cantidad de alimentación, restricciones para el ingreso de alimentos y medicinas, y deterioro acelerado de la condición física de personas privadas de libertad. La CIDH, al otorgar medidas cautelares a favor de todas las personas privadas de libertad del CPL Guayas N.° 1 (Resolución 99/2025), recogió información de la Defensoría del Pueblo sobre alrededor de 500 fallecimientos registrados entre

18. República del Ecuador, Ministerio del Interior, Política pública de rehabilitación social y atención integral a adolescentes infractores 2026-2029, aprobada el 30 de diciembre de 2025, https://www.ministeriodelinterior.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2026/01/30-12-2025_RE_Politica-Publica-de-Rehabilitacion-SociaI-y-Atencion-Integral-a-Adolescentes-Infractores-2026-2029.pdf.
19. CNN en Español, Hacinamiento, tuberculosis y violencia: el peligroso combo que afecta a las cárceles de Ecuador, 17 de diciembre de 2025, https://cnnespanol.cnn.com/2025/12/17/latinoamerica/hacinamiento-tuberculosis-carceles-ecuador-orix.
20. República del Ecuador, Ministerio de Salud Pública, MSP no registra fallecidos por tuberculosis en los centros de privación de libertad del país, comunicado oficial, 11 de marzo de 2025, https://www.salud.gob.ec/msp-no-registra-fallecidos-por-tuberculosis-en-los-centros-de-privacion-de-libertad-

enero y septiembre de 2025 y describió condiciones críticas incluso en áreas de atención sanitaria del propio centro penitenciario[21]. Por otra parte, el CDH, a partir de su monitoreo, ha contabilizado más de 700 fallecimientos asociados a tuberculosis y desnutrición durante el 2025. La ausencia de un registro oficial, público y actualizado sobre muertes en privación de libertad expresa una política negligente y la falta de voluntad del SNAI para reconocer y abordar un problema sanitario y humanitario en la Penitenciaría del Litoral.

Finalmente, respecto de malos tratos y tortura en contexto de militarización, desde 2024 la presencia de Fuerzas Armadas en cárceles y la expansión de un enfoque centrado en control han venido acompañadas de alertas y denuncias de prácticas de tortura[22] , incluyendo reportes de la Defensoría del Pueblo, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y la apertura de investigaciones en casos reportados. Estas denuncias deben ser investigadas y judicializadas por las instancias competentes; para efectos de este informe, se consideran un componente relevante del escenario de deterioro de garantías en custodia, en tanto se articulan con restricciones, obstáculos de acceso a derechos y mayor opacidad institucional.

En suma, la crisis penitenciaria ecuatoriana no puede leerse únicamente como un problema de *"orden interno"*: es un fenómeno estructural producido por el endurecimiento penal, el hacinamiento crónico, la desinstitucionalización y el debilitamiento sostenido de capacidades estatales. En 2025, este cuadro se expresa de forma especialmente aguda en el deterioro sanitario, la precarización alimentaria y el incremento de riesgos de violencia institucional, configurando un escenario de violaciones graves y continuas de derechos de las personas bajo custodia estatal.

21. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Resolución 99/2025: Medidas Cautelares No. 197-25 a favor de las personas privadas de libertad en el Centro de Privación de Libertad Guayas N.º 1 respecto de Ecuador (30 de diciembre de 2025), https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/mc/2025/res_99-25_mc_197-25_ec_es.pdf.
22. Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), Monitoreo de cárceles ocupadas por militares, 21-22 enero 2023, pronunciamiento, 2024, https://www.cdh.org.ec/ultimos-pronunciamientos/622-monitoreo-de-carceles-ocupadas-por-militares-21-22-enero-2023.html.

En este contexto, quienes han sostenido de manera sistemática la denuncia pública y las exigencias mínimas de condiciones de vida dignas para las personas privadas de libertad han sido, en gran medida, sus familiares. A través de búsqueda constante de información, presencia en los exteriores de los centros penitenciarios, trámites, reclamos y acompañamiento en espacios institucionales, las familias han documentado el deterioro y han insistido en el deber estatal de garantizar la vida y la integridad de las personas bajo custodia. En lo que sigue, se presenta evidencia situada que permite comprender cómo esta crisis se vive, se nombra y se enfrenta desde la experiencia concreta de las familias.

5. Familias de personas privadas de libertad: caracterización y desigualdades de género

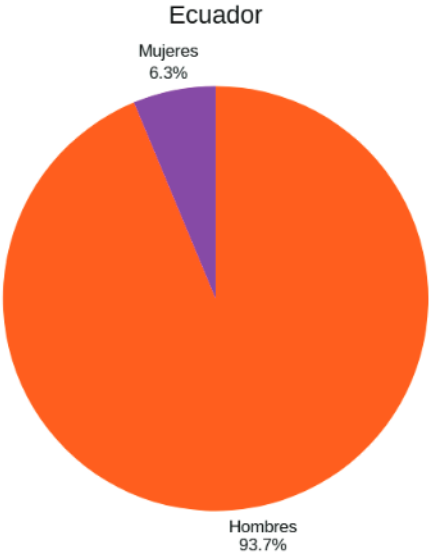
Según el censo penitenciario de 2023, el 93,7% de las personas privadas de libertad en Ecuador son hombres y el 6,3% son mujeres[23]. Esta composición ha contribuido a que el debate público y la política penitenciaria se concentren en los centros de varones, mientras las cárceles de mujeres, que enfrentan problemas estructurales similares, permanecen con menor visibilidad institucional, presupuestaria y mediática. El resultado es una gestión penitenciaria que, en la práctica, sigue lejos de implementar un enfoque de derechos humanos y de género capaz de responder a las necesidades específicas de las mujeres privadas de libertad, en toda su diversidad.



Foto: Andrés Loor

23. Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), Censo penitenciario 2023: Principales resultados (Quito: INEC, 2023), https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Poblacion_y_Demografia/Censo_penitenciario%20/2023/Principales_Resultados_CP2022.pdf.

Gráfico N° 1

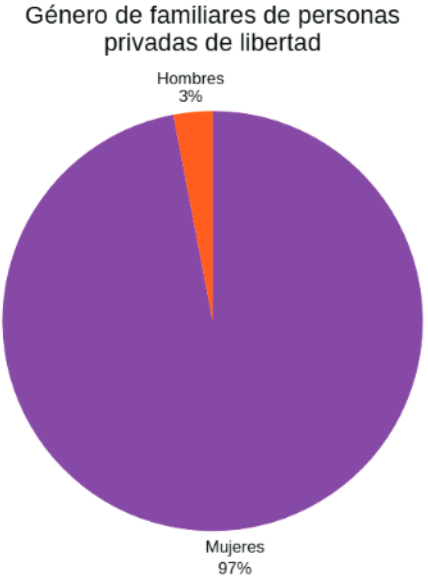


Sin embargo, las mujeres en reclusión no son las únicas afectadas por las omisiones del sistema penitenciario. Existe un conjunto más amplio de mujeres impactadas de forma sistemática: madres, parejas, hijas y hermanas, que permanecen invisibilizadas por un modelo penal que trata el encarcelamiento como una sanción individual y desconectada de los vínculos sociales y comunitarios[24].

En la práctica, el sistema carcelario se sostiene en gran medida mediante el trabajo material, emocional y logístico de las familias, y dentro de ellas, principalmente de las mujeres, que se convierten en el vínculo central entre la persona detenida y el exterior[25]. Esta tendencia se refleja también en los registros de atención del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH): el 97% de quienes acudieron a solicitar acompañamiento por un familiar privado de libertad son mujeres.

24. Las mujeres invisibles: Los costos de la prisión y los efectos indirectos en las mujeres. Catalina Pérez - 2015: https://publications.iadb.org/es/las-mujeres-invisibles-los-costos-de-la-prision-y-los-efectos-indirectos-en-las-mujeres
25. El impacto de la cárcel en mujeres familiares y las afectaciones a sus derechos humanos. RIMUF - 2023: https://rimuf.org/2023/03/rimuf-publica-y-difunde-su-estudio-regional-el-impacto-de-la-carcel-en-las-mujeres-familiares-y-las-afectaciones-a-sus-ddhh/

Gráfico N° 2

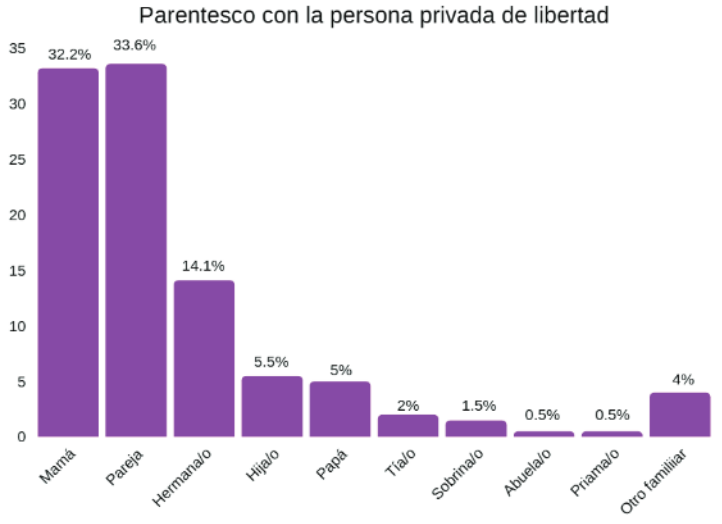


Fuente: CDH 2024

Género de familiares de personas privadas de libertad acompañadas por el CDH

Entre las familiares atendidas predominan las madres (33,2%) y las parejas (33.6%), seguidas por hermanas (14,1%) e hijas (5,5%) Esta distribución muestra que el encarcelamiento no se vive como una pena estrictamente individual, ya que la sostenibilidad cotidiana como los trámites, visitas, provisión de insumos, contención emocional y mediación con instituciones, recae de manera desproporcionada sobre mujeres, reproduciendo la feminización del cuidado y la responsabilidad familiar.

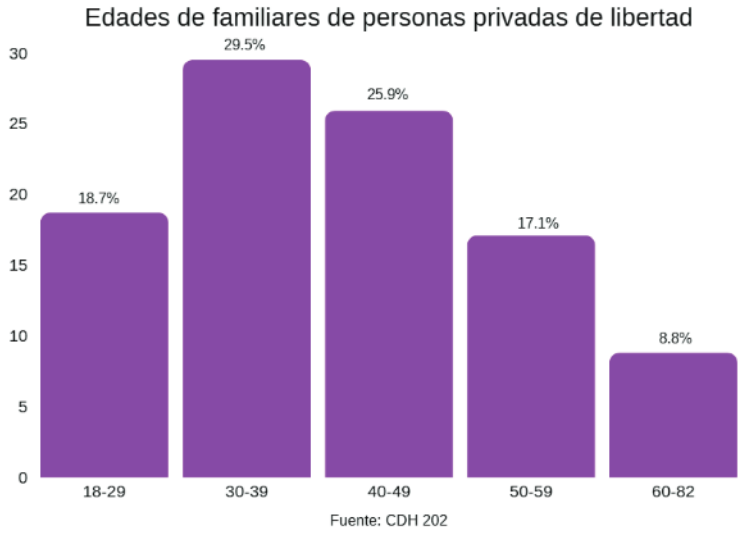
Gráfico N° 3



Fuente: CDH 2024

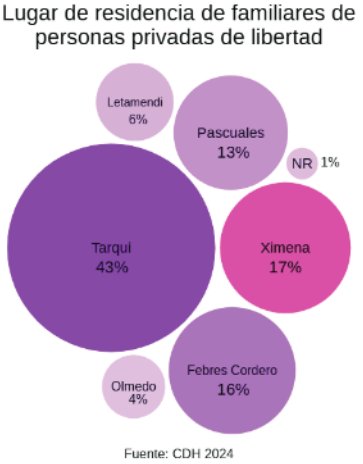
En términos de edad, las familiares se concentran principalmente entre 30 y 39 años (29,5%) y 40 a 49 años (25,9%), es decir, en etapas de la vida en las que suele acumularse trabajo remunerado, cuidado de hijas e hijos y otras responsabilidades en el trabajo no remunerado del hogar. En este contexto, el encarcelamiento opera como un factor que intensifica la sobrecarga, el desgaste y la reorganización forzada de la vida cotidiana.

Gráfico N° 4



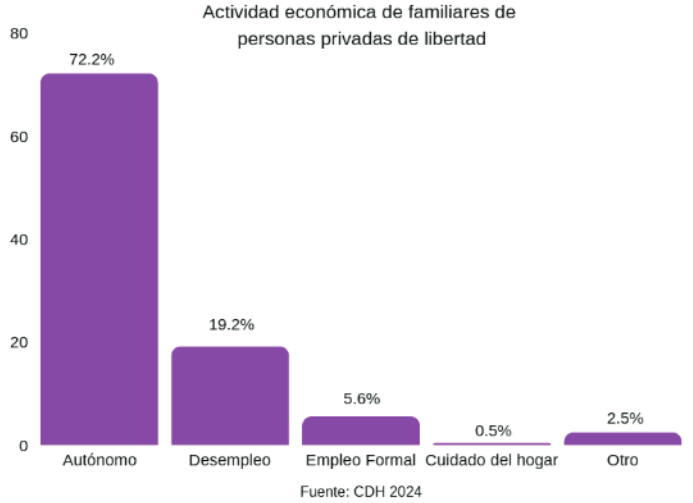
Territorialmente, el 71% de las familias atendidas reside en Guayaquil y el 29% proviene de cantones cercanos como Durán, Milagro y otros. Esto evidencia que la cárcel extiende sus efectos fuera de los muros y obliga a destinar tiempo y recursos para desplazamientos y gestiones, lo que se vuelve especialmente grave en hogares con ingresos precarios. Dentro de Guayaquil, la concentración en parroquias como Tarqui (43%), Ximena (17%), Febres Cordero (16%) y Pascuales (13%) ubica estas experiencias en sectores populares atravesados por pobreza, inseguridad y violencia, condiciones que incrementan la vulnerabilidad y los riesgos para las mujeres que acompañan.

Gráfico N° 5



La situación laboral refuerza esta lectura: el 72,2% de las familiares se dedica a economía autónoma y el 19,2% se encuentra desempleada. La informalidad y la falta de ingresos estables reducen la capacidad de absorber los costos asociados al encarcelamiento (movilización, alimentación, medicinas, recargas, trámites y vituallas), empujando a muchas familias al endeudamiento, a la pérdida de jornadas laborales y al deterioro del bienestar físico y emocional.

Gráfico N° 6



Aunque formalmente la pena recae sobre una persona, en términos materiales se redistribuye hacia su entorno familiar, y dentro de él, hacia las mujeres, en forma de costos económicos, emocionales, laborales, de salud, seguridad y proyecto de vida. Esta transferencia de responsabilidades desde el Estado hacia las familias constituye el núcleo de lo que aquí proponemos comprender como violencia de género vinculada al encarcelamiento: no como hechos aislados, sino como un mecanismo estructural en el que el sistema se sostiene mediante la desigual distribución del cuidado y la precarización de la vida de las mujeres.

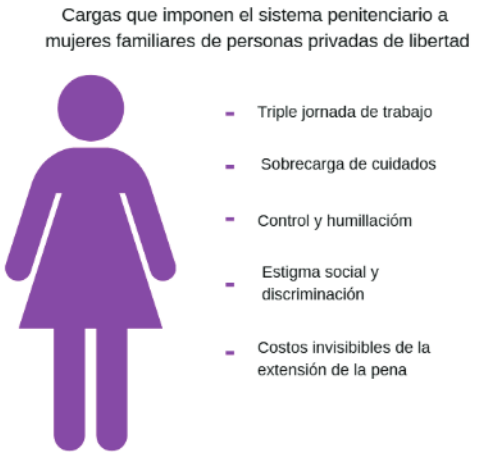
Los testimonios y hallazgos levantados permiten observar cómo esa redistribución material de la pena se vuelve cotidiana y medible en la vida de las mujeres familiares. En primer lugar, se configura una triple jornada que combina:

1. trabajo remunerado, frecuentemente informal, inestable o de subsistencia, para sostener el hogar;

2. trabajo del hogar y de cuidados no remunerado; y

3. trabajo específico vinculado a la cárcel, indispensable para la supervivencia de la persona privada de libertad desde el exterior: trámites, visitas, entrega de insumos, seguimiento de procesos, búsqueda de información y gestión permanente ante instituciones. Esta tercera dimensión no es solo acompañamiento a su familiar, se traduce en una práctica de trabajo forzado por omisión estatal, que consume tiempo, energía y recursos.

Gráfico N° 7



Fuente: Entrevistas realizadas a familiares de personas privadas de libertad - 2025

En segundo lugar, esta triple jornada se traduce en una expansión de la responsabilidad de cuidado. Las mujeres no solo sostienen a la persona encarcelada; también absorben las consecuencias familiares del encierro. Cuando la persona privada de libertad es un hijo, son las madres quienes suelen asumir la manutención y el cuidado cotidiano de nietas y nietos, y en general de otras personas dependientes vinculadas a la persona encarcelada. Así, el encarcelamiento reordena la vida familiar ampliando obligaciones sin redistribución interna ni soporte institucional, profundizando la feminización del cuidado.

En tercer lugar, la carga no es solo económica y de tiempo, está atravesada por violencia institucional y estigma. Las mujeres enfrentan requisas degradantes, vigilancia, arbitrariedades, maltrato y son sometidas al cateo intimo como forma de tortura, y al mismo tiempo cargan con una marca social que opera como sanción extendida por ser *"familia de un PPL".* Esa marca las expone a discriminación en espacios de integración social y servicios (salud, educación, trabajo), restringe sus redes de apoyo y agrava el aislamiento. En conjunto, lo que se evidencia no es un costo colateral, sino una producción sistemática de desgaste que afecta ingresos, salud, seguridad y proyecto de vida de las mujeres familiares de personas privadas de libertad.



Foto: Andrés Loor

6. Extensión del castigo: costos e impactos de la crisis carcelaria sobre familiares de personas privadas de libertad

7.1. Impacto emocional y psicológico

En el contexto de crisis del sistema penitenciario, la aplicación recurrente de estados de excepción y la militarización de los centros de privación de libertad han producido afectaciones directas sobre las familias que sostienen el vínculo con las personas privadas de libertad. Estas afectaciones no se reducen a la preocupación o la tristeza derivadas de la detención de un familiar. Se configuran como condiciones estructurales que reorganizan la vida cotidiana, deterioran el bienestar y reinstalan una experiencia de control y castigo que termina expandiendo la pena al ámbito familiar.

a) Incertidumbre por bloqueo o restricción de la comunicación

Uno de los factores que más impacta el bienestar emocional es el bloqueo o restricción de la comunicación con la persona privada de libertad. A partir de la declaratoria del conflicto armado interno y la militarización de las cárceles, se prohibieron visitas y se dificultaron los canales de contacto, dejando a las familias en un estado de incertidumbre sostenida al no poder acceder a información sobre ubicación, estado de salud, traslados o condiciones de vida. Esta falta de información genera un sufrimiento particular, cercano a un duelo suspendido y a un miedo persistente asociado a no poder confirmar si el familiar está vivo, enfermo, trasladado o expuesto a violencia. La vida diaria empieza a organizarse alrededor de esa espera y las familiares permanecen en alerta continua.

"Cuando yo me enteré que iban a ingresar los militares sentí un poco de calma porque pensé que la situación iba a mejorar, pero ya luego a los pocos días nos enteramos que habían ingresado a maltratar a nuestros hijos. Yo me quería morir. Corrí a la Peni a buscar información y nadie sabía nada. Muchas madres estaban afuera pidiendo información y nos dijeron que las visitas estaban prohibidas y que no podíamos comunicarnos con ellos porque les habían quitado celulares y todo. Un mes completo estuve sin saber absolutamente nada de mi hijo, con la incertidumbre todos los días de querer

saber cómo estaba. Yo todos los días iba a la Peni y no me decían nada, solo era ir para enterarme que los trataban peor que animales a nuestros familiares... No es justo vivir llorando todos los días, esto ha sido una situación que jamás imaginé vivir." (Entrevista a familiar de persona privada de libertad, 2025)

La extensión de la pena aparece con claridad en testimonios donde las mujeres se describen como *"otra presa",* no dentro de la penitenciaría, sino afuera, permaneciendo en los alrededores para intentar obtener noticias. Esa vigilia se produce en un entorno institucional donde la información se oculta y no se reconoce como un derecho de las familias. En varios relatos, esta condición implica ruptura de rutinas, deterioro del descanso y una reorganización completa del tiempo en función de la cárcel, profundizando la sobrecarga y el desgaste.

Por ello, la incertidumbre no debe verse como un efecto secundario, sino como parte de una violencia institucional que amplía el alcance de la pena hacia el entorno familiar. Cuando las familias no pueden acceder a información mínima y verificable, el vínculo afectivo se transforma en un canal de sufrimiento sostenido. Esto configura un castigo extendido, especialmente sobre mujeres que, por mandatos de género, cargan con el rol de sostener la vida del familiar y buscar condiciones mínimas de supervivencia cotidiana.

b) Proyección del maltrato hacia la vida familiar

Los testimonios muestran un segundo mecanismo de afectación. La violencia ejercida contra las personas privadas de libertad, incluidos tratos crueles, inhumanos o degradantes y prácticas de tortura, se proyecta también sobre sus familiares. Cuando reciben señales de que sus familiares han sido maltratados, humillados, amenazados o sometidos a violencia, el sufrimiento no queda circunscrito al espacio carcelario. Se instala en el hogar, atraviesa la vida familiar y refuerza una sensación persistente de vulnerabilidad e impotencia.

"Parecen calaveras andando. Los tienen encerrados como animalitos. Lo llaman centro de rehabilitación, pero lo que realmente parece es un centro calavérico para que la gente se muera, no para rehabilitar a la sociedad." (Entrevista a familiar de persona privada de libertad, 2025)

"Si ellos piden agua, viene primero el golpe. Si piden un poquito más de comida, lo primero que viene es el golpe. Y si les dan la comida, se la lanzan como a un animal al piso. Los desnudan, les pegan, les amenazan y les aplican castigos de forma recurrente. Los torturan todos los días." (Entrevista a familiar de persona privada de libertad, 2025)

"Le rompieron el pómulo y no lo atendieron. Le hacen botar sangre, les pegan en las piernas, en las uñas, les meten corriente, todos los días y sin razón alguna." (Entrevista a familiar de persona privada de libertad, 2025).

"Todos los días mueren en el pabellón. Los sacan y los tiran en el patio. Mueren por tuberculosis, por desnutrición y por golpes. Y de eso nos enteramos conversando con otros familiares, porque si vamos a pedir información no nos dicen nada. Entonces es como estar todos los días pendiente del celular deseando que no sea mi hijo. Yo no tengo vida, no puedo vivir en paz si sé que mi hijo está sufriendo." (Entrevista a familiar de persona privada de libertad, 2025)

Esta afectación se intensifica porque muchas familiares quedan encargadas de sostener, buscar, insistir y gestionar visitas, trámites, denuncias y seguimiento, sin control real sobre lo que ocurre dentro.

Esa combinación de responsabilidad y falta de capacidad de incidir en el resultado produce desgaste y descompone la vida cotidiana. Se interrumpen rutinas, se deteriora el descanso, se reduce la alimentación, se abandonan tratamientos médicos y la vida familiar se reorganiza alrededor de la cárcel.

c) Manifestaciones de deterioro del bienestar emocional

Los testimonios describen de forma reiterada tristeza persistente, preocupación constante, llanto frecuente, irritabilidad, agotamiento y dificultades para dormir y para comer. Una familiar lo sintetiza así:

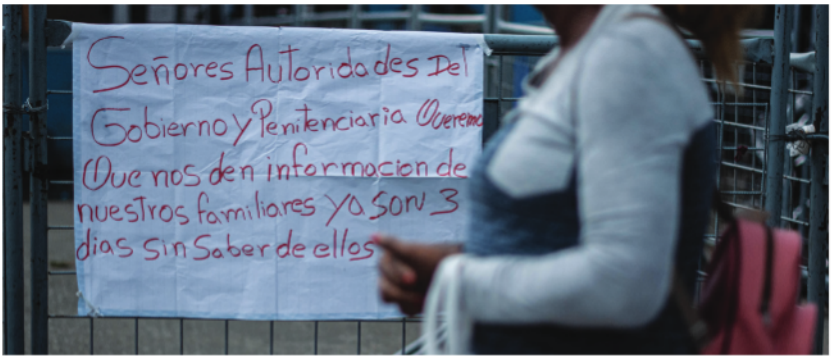


Foto: Billy Navarrete

"Me siento muy triste, deprimida, preocupada. Uno no puede comer bien, no puede dormir bien. Sabiendo lo que ellos están sufriendo, uno no puede estar contento. Es como no tener vida."

En la misma línea, una investigación sobre el impacto del encarcelamiento en mujeres familiares, realizada por la Red Internacional de Mujeres Familiares de Personas Privadas de Libertad (RIMUF), registró que el 85% refirió afectaciones a su salud mental posteriores al encarcelamiento del familiar, con predominio de estrés, nervios, agobio y tristeza. En los relatos recogidos, las preocupaciones constantes por el bienestar del familiar, el miedo a recibir malas noticias y la sensación de indefensión frente a las autoridades consolidan un estado de desgaste sostenido.

En conjunto, el encarcelamiento, y con mayor razón cuando ocurre en condiciones de crisis y militarización, produce en las mujeres familiares una afectación sostenida que combina incertidumbre prolongada, vigilia permanente, desgaste y aislamiento, con impactos directos en la salud, la vida laboral, las relaciones familiares y el proyecto de vida. Este daño debe entenderse como parte de un régimen que no solo administra encierro, sino también información, contacto y trato, desplazando a las familias, y especialmente a las mujeres, a una situación de sufrimiento persistente.

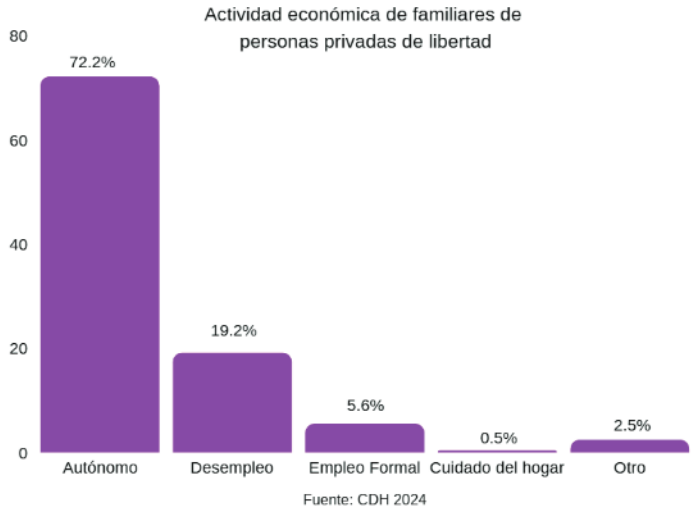
7.2. Impactos económicos

Las entrevistas y los datos del acompañamiento del CDH confirman un patrón que organizaciones de derechos humanos y familiares vienen denunciando. En el contexto de crisis carcelaria, una parte relevante del funcionamiento cotidiano de las cárceles se traslada a los hogares, y se cubre con el dinero y el tiempo de mujeres en condiciones de precariedad. Este traslado opera como una extensión material de la pena hacia el entorno familiar y se expresa en pérdida de ingresos, incremento de gastos recurrentes y exposición a cobros coercitivos.

a) Feminización de los costos y precariedad laboral

Los datos del CDH muestran que la inserción laboral de las familiares es mayoritariamente informal. El 72,2 % realiza actividades autónomas para obtener ingresos, el 19,2 % está desempleada y solo el 5,6 % tiene empleo formal. Este perfil describe economías de subsistencia con ingresos variables y acceso limitado a protección social.

Gráfico N° 8



Fuente: CDH 2024

En las entrevistas se observa, además, que la detención suele reordenar el trabajo dentro del hogar. Cuando la persona privada de libertad era quien aportaba ingresos estables, muchas familiares deben incorporarse o intensificar su participación en ocupaciones disponibles en el circuito informal. En la práctica, las posibilidades laborales resultan escasas y se concentran en venta de artículos varios, venta de comida preparada, organización de bingos u otras estrategias de autogestión, trabajo doméstico remunerado en otras casas y actividades intermitentes que, al mismo tiempo, permitan sostener el hogar, cumplir con el trabajo no remunerado doméstico y asumir las tareas de cuidado y gestión asociadas al familiar detenido. Esta combinación de responsabilidades incrementa la carga total de trabajo y reduce la posibilidad de acceder a empleos estables o con horarios definidos.

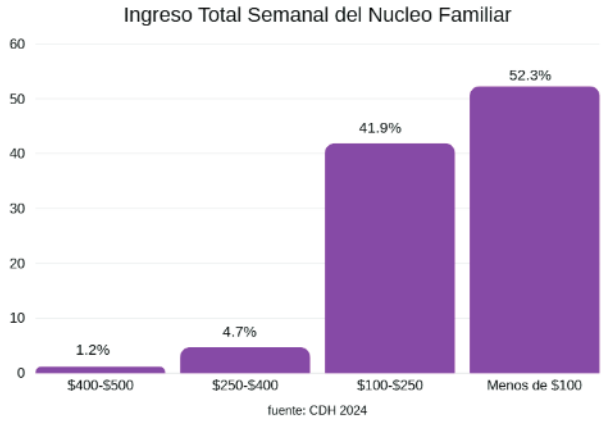
Yo antes no trabajaba porque mi hijo me ayudaba, pero ya cuando cayó preso todo se complicó y me tocó a mí buscar la forma de conseguir dinero para poder mantener todos los gastos. Yo gasté mucho dinero en abogados y trámites tratando de sacar a mi hijo pero no se pudo, de ahí en adelante me ha tocado trabajar en lo que sea para mi hijo, mis nietas que se quedaron conmigo y para mi propia subsistencia (...) Yo vendo comida, a veces compro mercadería y vendo, también hago bingos, hago cualquier cosa que pueda porque el dinero no alcanza y todas las semanas debo enviarle dinero a mi hijo para que pueda comer y saber que está bien. (Entrevista a familiar de persona privada de libertad, 2025).

En este escenario, el nivel de ingresos refuerza la precariedad de las familias y la imposibilidad de cubrir necesidades básicas. El 52,3% reporta ingresos totales menores a 100 dólares semanales. Con una base tan reducida, cualquier gasto recurrente asociado al encierro es regresivo, desplaza el consumo básico del hogar y limita la capacidad de afrontar emergencias. La evidencia comparada coincide en que el encarcelamiento incrementa el estrés económico familiar por

dos vías simultáneas, pérdida o reducción de ingresos y aparición de nuevos costos para mantener el vínculo y cubrir necesidades no garantizadas en el encierro, con impactos más severos en hogares de bajos recursos.

b) Gastos carcelarios

Gráfico N° 9



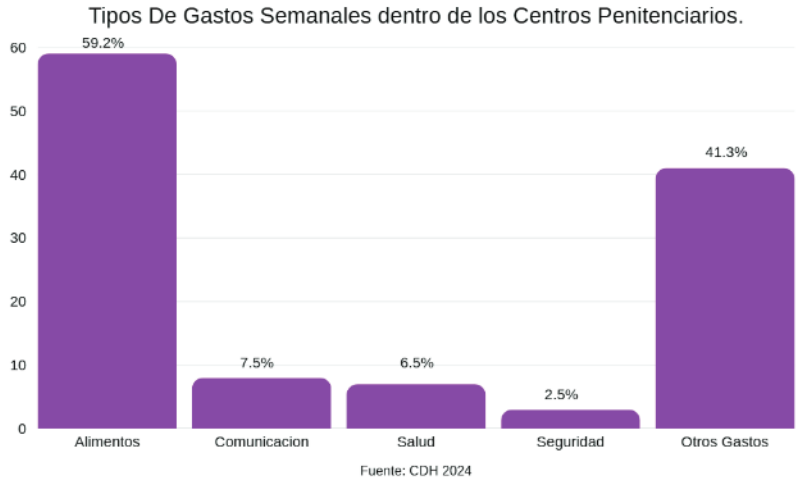
fuente: CDH 2024

En la región, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha advertido que las familias asumen pérdidas de ingresos y cargas materiales adicionales vinculadas a visitas y provisión de insumos básicos, pese a que el Estado mantiene obligaciones de garantía de condiciones dignas dentro del encierro.

En el registro del CDH, el 85,4% menciona gastar menos de 50 dólares semanales dentro de la cárcel. En términos mensuales, esto puede representar hasta 200 dólares o más, una carga significativa cuando el hogar se sostiene con ingresos inferiores al salario básico. Las entrevistas realizadas sugieren que esta cifra es una subestimación, ya que muchas familiares no incluyen los costos no recurrentes al calcular los costos mensuales. Otras investigaciones y reportes periodísticos sugieren que los costos ascienden entre los 124 a 300 dólares[26]. Estos gastos se destinan principalmente a necesidades elementales: El 59,2 % se destina a alimentación, el 7,5% a comunicación, el 6,5% a salud y el 2,5% a seguridad.

26. EL PAÍS, "Morir de hambre y tuberculosis en prisión: la crisis sanitaria que devora las cárceles de Ecuador", 26 de enero de 2026, https://elpais.com/america/2026-01-26/morir-de-hambre-y-tuberculosis-en-prision-la-crisis-sanitaria-que-devora-las-carceles-de-ecuador.html.
-France 24 en Español, "Ecuador: pagar para sobrevivir, la ley del narcotráfico en las cárceles", 24 de enero de 2024, https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20240123-pagar-para-sobrevivir-la-ley-del-narcotr%C3%A1fico-en-las-c%C3%A1rceles-de-ecuador.html.
-Primicias, "Masacre en la Penitenciaría: escasez de alimentos y un cuestionado economato propician extorsión con la comida de los presos," 13 de noviembre de 2024, https://www.primicias.ec/seguridad/masacre-penitenciaria-escasos-alimentos-economato-extorsion-comida-83228/?utm.

Gráfico N° 10



Los testimonios recogidos por el CDH respaldan estos datos y muestran que los depósitos semanales se destinan, principalmente, a asegurar alimentación o condiciones mínimas de protección. En este último caso, se trata de pagos realizados para evitar que el familiar detenido sea maltratado, golpeado o torturado. En muchos relatos, estos pagos se entregan a líderes de bandas que ejercen control sobre el pabellón donde se encuentra la persona privada de libertad y, en otros, se reporta que los pagos se realizan a personal militar. En consecuencia, en ciertos casos se configura un doble cobro por "seguridad", exigido tanto por grupos de delincuencia organizada como por agentes estatales, dentro de un centro penitenciario cuya custodia y garantía de condiciones de vida seguras y dignas son responsabilidad del Estado.

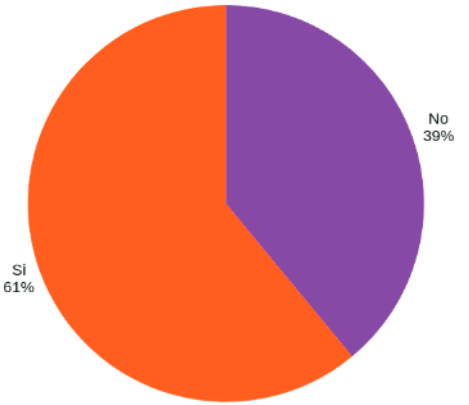
"Semanal le depositamos 20, 30 dólares porque nos dice ´Mami, yo tengo hambre... si no pago me van a golpear´. Como madre me desespero y me toca prestar o buscar donde sea.'" (Entrevista a familiar de persona privada de libertad, 2025).

"Yo pago 35 semanal todos los domingos. Y es para la comida, para que le den los jefes de la banda un poquito más, a veces me dicen que debo pagar para que no le peguen. Todo es plata, a veces ya no sé de dónde sacar para poder pagar." (Entrevista a familiar de persona privada de libertad, 2025).

Estos cobros extorsivos son una forma de control y violencia contra las familiares, quienes se ven obligadas a buscar recursos para asegurar la protección de sus familiares detenidos. El 61% de familiares manifiesta haber sido víctima de extorsión dentro del sistema carcelario. Este dato es central porque reconfigura la lectura de los gastos dentro del sistema.

Gráfico N° 11

Familiares que han sido Victimas de Extorsion Desde los Centros Penintenciarios



Fuente: CDH 2024

Estos datos demuestran que no se trata únicamente de costos para sostener el vínculo, sino también de transferencias forzadas bajo amenaza, en un entorno donde el control interno y la precariedad institucional abren espacio para cobros ilegales por comida, agua, protección o condiciones mínimas de supervivencia.

Otras investigaciones en Ecuador han documentado extorsión vinculada a la alimentación y a economatos, así como la lógica de pagar para sobrevivir dentro de los centros penitenciarios. En esta línea, se ha identificado que en las cárceles de Ecuador opera una gobernanza criminal cuya consolidación ha sido posible porque actores estatales, por acción u omisión, han permitido que grupos de delincuencia organizada instalen mecanismos de control y desarrollen economías criminales al interior de los centros penitenciarios[27].

Estas economías no solo ordenan la vida intramuros, sino que también se sostienen mediante transferencias económicas constantes desde el exterior. En la práctica, las economías criminales se lucran del trabajo y los ingresos de las familias, especialmente de mujeres, quienes asumen los costos cotidianos de tener a un ser querido en prisión a través de depósitos, pagos por supuesta seguridad, compras obligadas y otros egresos que sustituyen obligaciones que el Estado debería garantizar.

27. Insight Crime, "El negocio penitenciario en Ecuador," Insight Crime (sitio web de investigación sobre crimen organizado), 2025, https://www.insightcrime.org/es/investigaciones/negocio-penitenciario-ecuador/.
Renato Rivera Rhon, Captura carcelaria: La gobernanza criminal en el sistema penitenciario de Ecuador (Ginebra: Global Initiative Against Transnational Organized Crime, enero de 2026), https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2026/01/Renato-Rivera-Rhon-Captura-carcelaria-La-gobernanza-criminal-en-el-sistema-penitenciario-de-Ecuador-GI-TOC-enero-de-2026.pdf.

En términos de impacto familiar, la extorsión introduce inestabilidad financiera por dos vías. Primero, impone gastos impredecibles y urgentes. Segundo, presiona a los hogares a buscar liquidez rápida, lo que incentiva endeudamiento, venta de bienes, reducción de consumo básico y, en casos extremos, pérdida de vivienda. La literatura revisada para este informe sobre costos familiares del encarcelamiento describe esta trayectoria como una acumulación de daños materiales que limita la movilidad económica y profundiza la pobreza.

d) Pérdida de tiempo laboral y sobrecarga de cuidados

El impacto económico no se limita al dinero. La gestión del encierro absorbe tiempo de forma persistente en las familias: trámites legales, filas, traslados, búsqueda de información, provisión de insumos, etc. compiten directamente con jornadas de trabajo, especialmente en empleos informales donde no existen permisos ni estabilidad frente a ausencias. Estos hechos evidencian la imposición forzada de cargas de cuidado y sostenimiento que corresponden al Estado en su calidad de garante, pero que son trasladadas de manera obligatoria a las familiares, reproduciendo una distribución desigual e injusta de responsabilidades[28].

En conjunto, el encarcelamiento en Ecuador, particularmente bajo condiciones de crisis y militarización, produce un impacto económico y laboral que no se reduce a la caída de ingresos. Reestructura la vida material del hogar mediante tres mecanismos que se refuerzan entre sí. Primero, fragiliza ingresos por desempleo, informalidad y tiempo absorbido por gestiones carcelarias. Segundo, impone gastos recurrentes para cubrir necesidades básicas que el sistema no garantiza de forma efectiva. Tercero, expone a extorsión y cobros coercitivos que empujan a endeudamiento y precarización. El resultado es un castigo extendido que recae de manera desproporcionada sobre mujeres empobrecidas, que terminan sosteniendo con su trabajo, su dinero y su tiempo una parte del funcionamiento cotidiano de la cárcel, mientras persisten obligaciones estatales incumplidas.

7.3. Impactos sociales

El encarcelamiento de un familiar no solo produce afectaciones emocionales y económicas. También reordena la vida social de las familias y deteriora su vínculo con instituciones, redes comunitarias y espacios cotidianos de participación. Este impacto se profundiza por dos dinámicas que tienden a normalizarse. Por un lado, la exposición reiterada a prácticas degradantes o intimidantes durante trámites asociados al encarcelamiento, así como en la búsqueda de información, lo que instala humillación, desgaste y una sensación persistente de indefensión. Por otro, el estigma social asociado a ser familiar de una persona privada de libertad, que empuja al aislamiento, reduce redes de apoyo y anticipa discriminación en servicios como salud, educación y trabajo.

28. Fernando Bastias Robayo, "El camino de verdad, justicia y reparación de las familias víctimas de las masacres carcelarias en Ecuador," Andares: Revista de Derechos Humanos y de la Naturaleza No. 5 (enero-junio 2024): 25-38, https://revistas.uasb.edu.ec/index.php/andares/article/view/4524/4349.

El resultado es un círculo de vulnerabilidad de malos tratos a nivel institucional, ruptura de vínculos y pérdida de vida social.

En los testimonios recogidos por el CDH, las familiares describen que la detención marca un quiebre en su lugar social y en su pertenencia comunitaria. Una madre lo expresa con claridad al señalar que, desde la entrada de su hijo a prisión, su vida cotidiana se redujo a trabajar y a sostener la supervivencia del familiar detenido, mientras aumentaban los juicios sociales sobre ella.

Desde que mi hijo entró a la cárcel dejé de tener vida social, porque no tengo tiempo ni dinero. Todo lo que hago es trabajar y pensar en cómo sacarlo de allí; ahí están todos mis esfuerzos, en hacer hasta lo imposible para que no me lo maten ahí dentro (…) Y me he sentido discriminada muchas veces, porque cuando un familiar entra a la cárcel, a quien juzgan también es a la madre. Sobre nosotras cae la responsabilidad de no haber criado bien a un hijo, pero lo que muchas personas no saben es que en la cárcel hay mucha gente inocente. Hasta la propia familia se aleja: todo el mundo juzga. (Entrevista a familiar de persona privada de libertad, 2025)



Foto: Andrés Loor

Los relatos también muestran que el estigma no se limita al entorno comunitario, sino que se reproduce en el trato institucional. Varias mujeres describen que, desde el momento en que un familiar entra a la cárcel, se habilita un trato hostil en distintos espacios, especialmente al solicitar información, gestionar trámites o buscar asistencia legal.

En esa experiencia, la exclusión institucional no aparece como un hecho aislado, sino como una práctica reiterada que coloca a las familias en una posición de subordinación, demoras en los trámites y trato deshumanizante. En esa línea, una entrevistada lo sintetiza así:

Desde que un familiar entra a la cárcel, es como si todo el mundo tuviera derecho a tratarte mal, a humillarte y a discriminarte en todos lados: cuando uno quiere pedir información, cuando va a hacer un trámite, cuando simplemente pides ayuda para tu hijo o cuando buscas un abogado público. Es como si el derecho a ser defendido y atendido dejará de existir. En todos lados te cierran las puertas y te dejan para lo último, como si fueras lo menos importante. Por eso digo que tener un familiar preso es como estar una misma presa y pagar fuera de la cárcel una condena. (Entrevista a familiar de persona privada de libertad, 2025)



Foto: Andrés Loor

Este mensaje de deshumanización aparece de forma explícita en otro testimonio:

Yo he ido como dos o tres veces a la peni a dejar oficios para que a mi niño me lo saquen al policlínico y yo he preguntado a militares, a la policía que cuando habrá visitas cita y ellos me han dicho: "No va a 43 haber visita más. No van a volver a ver a sus hijos nunca más, así que ya ni vengan y busquen oficio". Salgo como mamá, salgo llorando, salgo mal porque mi hijo es mi vida y no es justo que uno no pueda siquiera pedir información o tener la esperanza de que lo volveré a ver. (Entrevista a familiar de persona privada de libertad, 2025)

Estas expresiones atribuidas a personal estatal, condensan la idea de que el vínculo familiar no es un derecho a proteger, sino que entra bajo la lógica de nulidad de derechos, ya no solo para la persona privada de libertad, sino también, para sus familiares. Este tipo de trato refuerza el silenciamiento, desalienta la exigencia de información y normaliza la arbitrariedad sobre las familias

Lo documentado por la Red Internacional de Mujeres Familiares de Personas Privadas de Libertad coincide con estos hallazgos al señalar que la discriminación hacia mujeres familiares es recurrente y que el trato recibido en ámbitos penitenciarios y asociados a la detención suele ser percibido como negativo, además de situarlas como sospechosas por su vínculo con la persona detenida. Del mismo modo, se ha descrito que las familias pueden ser tratadas como cómplices o como *"no merecedoras"* de apoyo por su asociación con la persona encarcelada, lo que produce una forma de castigo social que se suma a la precariedad material preexistente.

En conjunto, los testimonios permiten concluir que los impactos sociales se expresan en tres efectos principales que se refuerzan entre sí. Primero, un deterioro del trato institucional y del acceso efectivo a información, trámites y asistencia, bajo lógicas de sospecha y deshumanización. Segundo, el estigma social que reduce redes, multiplica juicios morales y empuja al aislamiento. Tercero, la ruptura de la vida comunitaria y de espacios cotidianos por falta de tiempo, recursos y seguridad emocional, lo que consolida una experiencia de castigo extendido. Esta configuración produce un doble efecto de exclusión, por condiciones de pobreza y por el vínculo con una persona etiquetada socialmente como delincuente, afectando de manera desproporcionada a mujeres que sostienen el contacto, el cuidado y la gestión cotidiana del encierro.

7. Vulneración de derechos humanos y violencia de género

Los hallazgos documentados en este informe no describen únicamente impactos colaterales derivados del encarcelamiento de un familiar. Dan cuenta de un conjunto de prácticas y condiciones que, por su intensidad, recurrencia y patrones, se insertan en el campo de las violaciones de derechos humanos cometidas en contexto de custodia estatal. Además, estas vulneraciones operan de manera diferenciada sobre las mujeres familiares, reproduciendo y profundizando desigualdades de género vinculadas a la carga de cuidado, la estigmatización y la exposición a violencia institucional.

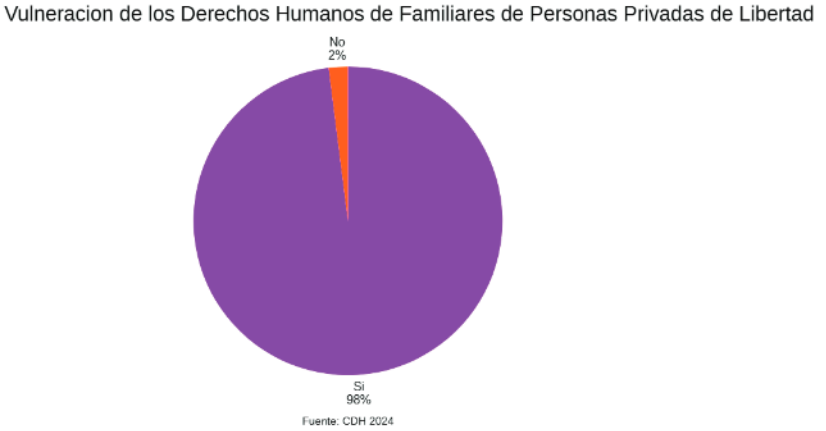
En su conjunto, las prácticas descritas en testimonios y en el registro del CDH permiten caracterizar un patrón de vulneraciones que incluye tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes; negación o falta de acceso efectivo a atención médica; ausencia o restricción arbitraria de información sobre paradero y estado de salud; limitaciones desproporcionadas al derecho a la visita y al mantenimiento del vínculo familiar; estigmatización y discriminación en la interacción con autoridades y servicios; y ausencia de garantías básicas para la vida y la integridad en el encierro.

Esta lectura se refuerza con los datos del propio acompañamiento del CDH. El 98% de familiares menciona sentir que sus derechos humanos han sido vulnerados. Las vulneraciones más referidas son acceso a la información (71,1%) e integridad física y mental (15,9%), lo que confirma que el daño no se reduce a la detención del familiar, sino que se estructura alrededor de un régimen de opacidad, incertidumbre y desgaste sostenido. La falta de información clara y oportuna sobre el paradero, estado de salud o condiciones de detención obliga a las familias a permanecer en búsqueda constante, reorganizando su tiempo, su economía y su vida cotidiana en función de la cárcel.



Foto: Andrés Loor

Gráfico N° 11



A esta situación se suma un patrón reiterado de impunidad frente a denuncias. Las familiares relatan haber presentado oficios, quejas y solicitudes ante distintas instancias sin recibir respuestas efectivas, investigaciones diligentes ni sanciones frente a hechos de tortura, malos tratos o negación de atención médica. La ausencia de mecanismos accesibles y confiables de denuncia produce una doble afectación: por un lado, perpetúa las violaciones intramuros; por otro, instala en las familias una sensación persistente de indefensión y descrédito institucional. Esta respuesta inadecuada del Estado no solo prolonga el daño, sino que lo profundiza, manteniendo a las familiares en un estado de frustración, angustia y revictimización.

El impacto se agrava en un contexto atravesado por corrupción y economías ilegales al interior de los centros penitenciarios. Los testimonios documentan pagos recurrentes para asegurar alimentación, medicinas o *"protección"*, bajo amenaza de golpes o represalias. Estos costos no son excepcionales ni voluntarios; forman parte de un sistema donde las economías criminales y las omisiones estatales trasladan a las familias la responsabilidad de sostener condiciones mínimas de supervivencia. En consecuencia, los hogares, mayoritariamente sostenidos por mujeres en economías informales, enfrentan endeudamiento, pérdida de ingresos, venta de bienes y abandono de proyectos personales y familiares. La cárcel no solo altera la vida del familiar detenido; reconfigura de manera estructural el proyecto de vida de quienes quedan afuera.

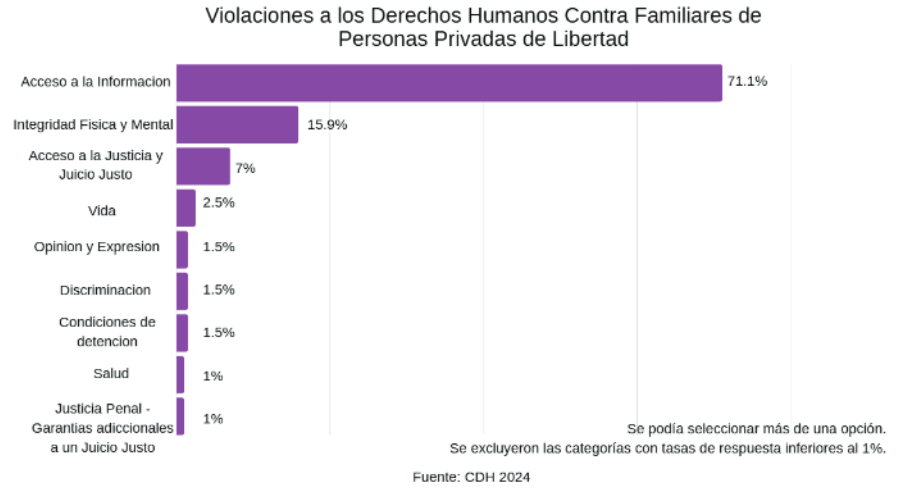
Esta transformación forzada del proyecto de vida se expresa en la sobrecarga de cuidados, en la intensificación del trabajo remunerado e informal, en la interrupción de trayectorias laborales y educativas y en la exposición constante a humillaciones y estigmatización. Las mujeres familiares describen cómo sus esfuerzos se concentran exclusivamente en sostener la supervivencia del familiar privado de libertad, desplazando aspiraciones propias, tiempo de descanso y vida comunitaria. El encarcelamiento, en este marco, opera como un dispositivo que redistribuye la pena hacia el entorno familiar, profundizando desigualdades de género y pobreza preexistentes.

En conjunto, la combinación de opacidad institucional, impunidad frente a denuncias, corrupción, costos económicos coercitivos y deterioro sostenido del bienestar físico y emocional permite concluir que las condiciones en las que se encuentran las familiares de personas privadas de libertad exceden el ámbito de las dificultades administrativas o económicas. Se trata de un escenario que configura tratos crueles, inhumanos y degradantes, en tanto produce sufrimiento intenso, humillación, inseguridad permanente y una afectación grave y continuada a la integridad personal. La pena, en estas circunstancias, no permanece intramuros, se expande y se instala en la vida de las mujeres que sostienen la vida dentro y fuera de las cárceles.



Foto: Andrés Loor

Gráfico N° 12



Fuente: CDH 2024

8.1. Violencia de género contra las familiares

En el caso de las mujeres familiares, estas vulneraciones adquieren además una dimensión específica de violencia de género, tanto por el contenido de las prácticas como por el modo diferenciado en que recaen sobre ellas. Para este informe se han identificado, al menos, tres formas de manifestación de esta violencia:

a) Violencia sexual

Los testimonios describen inspecciones humillantes y tocamientos, incluyendo revisiones intrusivas en partes íntimas. Estas prácticas no pueden justificarse bajo un procedimiento de seguridad rutinario porque implican acceso físico al cuerpo de mujeres desde una relación de poder y subordinación. En el contexto penitenciario, la posibilidad de negarse es prácticamente inexistente, ya que el ingreso a ver al familiar y el mantenimiento del vínculo quedan condicionados al sometimiento. Por ello, no hay consentimiento libre, sino coerción y anulamiento de la autonomía corporal.

Desde un enfoque de género, estos cateos íntimos, cuando implican intervenciones forzadas, constituyen un acto de tortura por los tratos crueles, inhumanos y degradantes de su carácter invasivo, humillante y por el sufrimiento físico y psíquico que provocan . Además, por su materialidad y por la ausencia de consentimiento, se configuran como violencia sexual, en tanto se trata de una imposición corporal ejercida desde una relación desigual, con un componente de dominación y disciplinamiento sobre el cuerpo de las mujeres.

En esta línea, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que, en el marco de las visitas, los Estados deben prohibir sin excepciones los registros intrusivos vaginales y anales a las personas visitantes y emplear medios alternativos de registro no invasivos . En los relatos de familiares para este informe, esta prohibición aparece frontalmente incumplida.

Los testimonios demuestran lo invasivo, violento y denigrante de esta práctica:

"Cuando aún se podían realizar visitas, a algunas mujeres les metían el dedo en sus partes íntimas para probar que no llevaban nada malo. Toca dejarse porque si alguien se queja enseguida la tratan mal o la revisan con más, no queda más que aguantar (…) Es verdad que uno se siente mal por todo lo que tiene que pasar para poder ingresar a ver a sus hijos, pero no nos queda de otra". (Entrevista a familiar de persona privada de libertad, 2025)

Otro testimonio describe la misma lógica de trato humillante para acceder al derecho de ejercer el vínculo familiar:

"Yo fui a la visita y cuando entré me revisaron todo, me sacaron todo, me hicieron bajar del interior todo para ver que no llevara nada en mis partes íntimas. Como es una mujer la que hace la revisión piensan que es más fácil para nosotras o que por eso no nos afecta, pero no es así. Es horrible que te toqueteen, es denigrante, pero es lo que a muchas madres nos toca hacer por nuestro familiar". (Entrevista a familiar de persona privada de libertad, 2025)

En el caso ecuatoriano, el Código Orgánico Integral Penal en su artículo 171 define la violación incluyendo la introducción por vía vaginal o anal de objetos, dedos u órganos distintos al miembro viril, y se vincula a la ausencia de consentimiento. En ese sentido, cuando un cateo íntimo implica una intervención forzada de esa naturaleza, realizada desde la coerción y sin consentimiento libre, se trata de una agresión sexual y compromete de manera grave la integridad sexual y la autonomía corporal de las mujeres familiares.

En suma, estas prácticas constituyen violencia sexual e institucional por tres elementos concurrentes: i) el acceso corporal invasivo y humillante, ii) la relación estructural de poder que anula el consentimiento, y iii) su uso como condición para mantener el vínculo familiar. Su reiteración y tolerancia en el marco de políticas de control agravan su carácter, pues no se presentan como graves violaciones a derechos humanos, sino como prácticas institucionales que castigan a las mujeres familiares de personas privadas de libertad.

b) Sobrecarga de cuidados y sostenimiento económico

El informe muestra que el sostenimiento cotidiano del vínculo y, en la práctica, parte de la subsistencia intramuros se traslada a los hogares. Esta carga recae de forma desproporcionada en mujeres, no por casualidad, sino por roles de género preexistentes que asignan a madres, parejas, esposas y hermanas la responsabilidad de sostener la vida, gestionar trámites, sostener visitas y garantizar alimentos, medicinas y *"protección"* bajo coerción. El resultado es una intensificación de trabajo de cuidado no remunerado y de presión económica, con daño directo en autonomía, salud y vida social.

c) Violencia institucional

Los relatos del informe muestran que la violencia institucional no se expresa solo como maltrato general, sino como un trato dirigido a mujeres en cuanto madres, parejas o cuidadoras, muchas veces atravesado por culpabilización moral, sospecha y humillación. Esta forma de violencia es compatible con la definición regional de violencia contra la mujer cuando se trata de acciones o conductas basadas en género que causan daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico en el ámbito público o privado. En este caso, se trata de violencia ejercida por funcionarios públicos o tolerada en el marco de políticas de control y seguridad, lo que agrava su carácter.

Un punto central es que estas violencias: físicas, psicológicas, económicas y simbólicas, no aparecen como episodios excepcionales. Se describen como prácticas repetidas en distintos momentos y espacios del sistema penitenciario, cometidas por agentes estatales o posibilitadas por su acción u omisión. Esto desplaza el análisis desde casos individuales hacia un funcionamiento institucional que permite violencia, restricciones arbitrarias del vínculo y procedimientos humillantes como parte de la política carcelaria.

La CIDH ha establecido lineamientos claros para los Estados en relación con personas privadas de libertad y sus familias, entre ellos prevenir y combatir la estigmatización, promover la participación de familias en la vida intracarcelaria, y garantizar el derecho a mantener vínculos familiares, facilitar visitas en condiciones adecuadas y accesibles, e informar sobre paradero, salud y condiciones de detención. Nada de esto se cumple a cabalidad en el contexto descrito. Por el contrario, lo documentado muestra una política práctica que rompe vínculos, castiga a quienes cuidan y expone a las mujeres a situaciones de violencia de género.

8. Conclusiones

8.1. Existe un impacto diferenciado en las mujeres familiares que constituye una forma de violencia basada en género.

El impacto de la crisis carcelaria y de la gestión estatal de los centros de privación de libertad no se agota en el espacio intramuros. Se extiende de forma directa hacia las familias y lo hace de manera diferenciada. La evidencia recogida demuestra que las principales afectadas son mujeres, madres, parejas, hijas y hermanas, quienes asumen la carga material, emocional y logística del encarcelamiento.

Sobre ellas recae la gestión de trámites, la provisión de alimentos y medicinas, los depósitos para subsistencia y *"protección",* la búsqueda de información y la contención emocional del núcleo familiar. Este tipo de violencia constituye una forma de violencia basada en género, en la medida en que reproduce mandatos históricos de cuidado, intensifica la sobrecarga no remunerada y expone a las mujeres a prácticas humillantes, extorsivas y degradantes vinculadas al mantenimiento del vínculo familiar. La cárcel, en este sentido, no solo produce violencia intramuros; redistribuye el daño hacia mujeres empobrecidas que sostienen la vida en condiciones de precariedad, estigmatización y riesgo.



Foto: Andrés Loor

8.2. Las afectaciones constituyen graves violaciones a Derechos Humanos y materializa la extensión de la pena.

El conjunto de afectaciones documentadas, negligencia institucional, restricción arbitraria del vínculo, impunidad frente a denuncias, exposición a tratos humillantes, extorsión económica y deterioro psicosocial, no puede ser entendido como un efecto colateral del encarcelamiento. Su carácter reiterado, generalizado y estructural configura graves violaciones a derechos humanos que afectan la integridad personal, la salud física y mental y el proyecto de vida de las familias. En los hechos, se produce una forma de trascendencia de la pena, contraria al principio de personalidad descrito anteriormente, mediante la cual el castigo rebasa a la persona condenada y alcanza a su entorno. La ausencia de respuestas eficaces del Estado frente a denuncias y la normalización de prácticas degradantes refuerzan un patrón que mantiene a las familias en indefensión permanente. A pesar de ello, estas mismas familias han sido históricamente invisibilizadas en los procesos de toma de decisiones en materia penitenciaria y seguridad, pese a ser actores centrales en la sostenibilidad del sistema y en los procesos de reintegración social.

8.3. Gobernanza punitiva, corrupción y desplazamiento de obligaciones estatales

La investigación evidencia que, en el contexto de militarización y debilitamiento institucional, el Estado ha desplazado hacia las familias obligaciones que le corresponden en calidad de garante. Alimentación, acceso a salud, protección mínima y mantenimiento del vínculo se sostienen, en gran medida, mediante recursos económicos y trabajo de cuidado asumido por mujeres en economías informales. A ello se suma la consolidación de economías criminales y prácticas de corrupción que operan al interior de los centros penitenciarios y que se financian con transferencias constantes desde el exterior. Este esquema no solo precariza a los hogares, sino que instala una forma de gobernanza punitiva que combina abandono, control y extracción económica. El resultado es un sistema que produce violencia estructural tanto dentro como fuera del sistema penitenciario.

8.4 Abandono estatal y promoción de la muerte en los centros penitenciarios

Los hallazgos permiten sostener que la actual gestión penitenciaria se desarrolla en un marco donde la administración de la vida y la muerte



Foto: Andrés Loor

opera mediante omisión, opacidad y desprotección dentro de un discurso de abandono voluntario de la obligación de protección a favor de las personas detenidas. El deterioro sanitario, la crisis alimentaria, la falta de registros claros sobre fallecimientos y la reiteración de denuncias de tortura y malos tratos no son episodios aislados, sino expresiones de una política penitenciaria que ha normalizado la precarización extrema. Esta configuración compromete la legitimidad institucional y erosiona la confianza pública en el Estado como garante de derechos.

8.5. Familias como sujetas de derechos y actoras políticas

Finalmente, este informe confirma que las familias de personas privadas de libertad no son actores secundarios ni víctimas pasivas. Pese a la violencia institucional, la falta de información, el trato indigno y el estigma social que enfrentan cotidianamente, las familiares han construido formas autónomas de organización, denuncia y resistencia.

Estas formas de acción incluyen la realización de plantones, la participación en marchas, la organización de colectas de insumos básicos, la activación de redes sociales y la creación de canales de comunicación por WhatsApp para mantenerse informadas sobre lo que ocurre dentro de los centros de privación de libertad. A través de estos mecanismos, las familias conocen de primera mano las falencias del sistema penitenciario, documentan vulneraciones de derechos y sostienen redes de cuidado frente a la ausencia o insuficiencia de respuestas estatales.

Han sido, de manera persistente, las principales denunciantes de las condiciones carcelarias y las impulsoras de exigencias mínimas de vida digna. Su experiencia acumulada constituye un saber situado imprescindible para la formulación de políticas públicas de rehabilitación social con enfoque de derechos humanos y de género. Reconocerlas como sujetas de derechos implica no solo garantizar información, trato digno y protección frente a la violencia institucional, sino también incorporarlas en la deliberación pública sobre el sistema penitenciario. La superación de la crisis carcelaria no será posible mientras el debate continúe excluyendo a quienes, día a día, sostienen la vida dentro y fuera de las cárceles, y luchan por verdad, dignidad, cuidado y justicia.

9. Recomendaciones

1. Instituir un proceso integral de verdad, justicia y reparación por los hechos ocurridos entre el 2018 y el 2025

Crear un mecanismo independiente y con participación internacional que investigue de manera exhaustiva los hechos violentos ocurridos en el sistema penitenciario entre 2018 y 2025, incluyendo masacres, muertes por condiciones sanitarias y denuncias de tortura. Este proceso debe reconocer expresamente a las familias como víctimas directas de graves violaciones a derechos humanos, garantizando su participación, acceso a la verdad, reparación integral (material, simbólica y psicosocial) y garantías de no repetición.

2. Impulsar una reforma estructural del sistema penitenciario con enfoque de derechos humanos y género que involucre a las familias de personas privadas de libertad como titulares de derechos

Desarrollar una reforma integral que trascienda la lógica securitista y coloque en el centro la dignidad humana, incluyendo medidas específicas para proteger los derechos de las familias de personas privadas de libertad. Esta reforma debe incorporar un enfoque diferenciado y de género que reconozca la feminización del impacto del encarcelamiento, prohíba prácticas humillantes como cateos intrusivos y garantice el mantenimiento del vínculo familiar en condiciones dignas.

3. Garantizar acceso efectivo y oportuno a la información

Establecer protocolos claros, públicos y obligatorios para informar a las familias sobre el paradero, estado de salud, traslados y condiciones de detención de sus seres queridos. La información no puede depender de gestiones informales ni de la discrecionalidad de funcionarios. Deben crearse canales formales y verificables con responsabilidad administrativa ante incumplimientos.

4. Fortalecer mecanismos independientes de denuncia e investigación

Crear y robustecer mecanismos accesibles, confidenciales y seguros para denunciar tortura, malos tratos, extorsión y corrupción dentro del sistema penitenciario, incluyendo líneas específicas para familiares. Las denuncias deben derivar en investigaciones prontas, imparciales y con protección efectiva frente a represalias.

5. Desmilitarizar progresivamente la gestión penitenciaria

Reorientar la administración de los centros de privación de libertad hacia un modelo civil, técnico y especializado, con formación penitenciaria adecuada y protocolos basados en estándares internacionales de derechos humanos. La permanencia prolongada de Fuerzas Armadas en funciones penitenciarias debe ser revisada bajo criterios estrictos de temporalidad y proporcionalidad.

6. Establecer mecanismos de apoyo económico y psicosocial a familias

Implementar programas públicos de acompañamiento psicosocial y apoyo económico dirigidos a familiares de personas privadas de libertad, con especial atención a mujeres cuidadoras en contextos de pobreza. Esto incluye subsidios de transporte, asistencia legal gratuita efectiva, orientación en trámites y apoyo en salud mental.

7. Incorporar a las familias en la formulación de políticas públicas penitenciarias

Garantizar la participación efectiva de familiares en espacios de deliberación y evaluación de políticas penitenciarias. Las decisiones sobre visitas, comunicación, alimentación y salud no pueden adoptarse sin considerar el impacto extramuros. La experiencia situada de las familias constituye un insumo indispensable para políticas más humanas y eficaces.

8. Reconocer a las familiares como defensoras de derechos humanos

Adoptar medidas institucionales que reconozcan públicamente a las madres, hijas, esposas y hermanas que denuncian violaciones en cárceles como defensoras de derechos humanos. Esto implica brindar protección frente a amenazas o estigmatización, así como abstenerse de discursos que las criminalicen o deslegitimen.

9. Garantizar condiciones que excluyan tratos crueles, inhumanos y degradantes

Asegurar que las políticas penitenciarias cumplan con estándares internacionales que prohíben cualquier forma de trato cruel, inhumano o degradante tanto hacia personas privadas de libertad como hacia sus familiares. Esto incluye condiciones dignas de visita, eliminación definitiva de cateos intrusivos, provisión suficiente de alimentos y medicinas, atención médica oportuna y registros públicos transparentes sobre fallecimientos bajo custodia.



Foto: Andrés Loor

LOS DERECHOS DE FAMILIARES Y PERSONAS CON VINCULOS AFECTIVOS DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD

RESOLUCIÓN No. 2/25

(Adoptada por la CIDH el 24 de julio de 2025)

PRINCIPIOS GENERALES

Igualdad y no discriminación

1. Los Estados deben asegurar la aplicación irrestricta del principio de igualdad y no discriminación en todas las medidas que se adopten para garantizar los derechos de las personas privadas de libertad y sus familias. En el marco de esta obligación, deberían prevenir y combatir cualquier acción que promueva la discriminación y estigmatización de las y los familiares de personas privadas de libertad, especialmente las motivadas por la discapacidad, edad avanzada, o cualquier otro factor de vulnerabilidad.



Foto: Andrés Loor

2. Los Estados deben aplicar el principio del interés superior de la niñez, en conjunto con el principio de igualdad y no discriminación, para considerar su situación específica y los efectos desproporcionados en niñas, niños y adolescentes con una persona referente adulta privada de libertad .

Protección del vínculo familiar

3. Los Estados tienen la obligación de adoptar medidas orientadas a fortalecer la familia y proteger el vínculo familiar entre las personas privadas de libertad y sus familias.

4. Los Estados deben favorecer de la manera más amplia posible el desarrollo y fortalecimiento del núcleo familiar como medida de protección de la niñez, lo cual abarca a las familias integradas por personas privadas de libertad

Enfoques diferenciados, interculturales e interseccionales

5. Los Estados deberían incorporar enfoques diferenciados, interculturales e interseccionales de protección en todas las leyes y prácticas que se adopten a fin de garantizar los derechos de las y los familiares de las personas privadas de libertad. Dichas medidas deben considerar impactos a sus derechos incluso por razones socioeconómicas, y los posibles obstáculos que pueden enfrentar algunos grupos de personas en especial situación de riesgo, con énfasis en las niñas, niños y adolescentes, y las personas con discapacidad o mayores.

Deberes estatales para garantizar los derechos de las familias y personas con vínculos afectivos de las personas privadas de libertad

6. En sus legislaciones, reglamentos y prácticas en materias penitenciaria y de ejecución penal, los Estados deberían reconocer que el apoyo familiar y las redes sociales de contención constituyen elementos fundamentales para la reinserción social de las personas privadas de libertad y, por consiguiente, para garantizar uno de los fines de la pena privativa de libertad.



Foto: Billy Navarrete

7. En el marco del desarrollo, implementación y evaluación de políticas y programas en materia penitenciaria, los Estados deberían incorporar las perspectivas y opiniones de las y los familiares de las personas privadas de libertad a fin de fortalecer la reinserción social, lo cual incluye la participación de las niñas, niños y adolescentes en función de su edad, madurez y grado de desarrollo. Para ello resulta esencial que los Estados reconozcan y promuevan procesos de participación de las familias en la vida intracarcelaria, sin discriminación por edad avanzada, discapacidad o cualquier otro motivo.

8. Los Estados deberían asegurar que los sistemas de información penitenciarios incluyan indicadores sobre la composición familiar de las personas al momento de su detención con el propósito de recopilar datos sobre el grupo familiar de las personas privadas de libertad y visibilizar de las familias. Ello, con especial énfasis en la identificación de aquellas que tienen hijas e hijos menores de edad fuera de prisión o son responsables del cuidado de otras personas, especialmente de personas mayores o personas con discapacidad. Dichos datos serían

recopilados a partir de la información voluntariamente brindada por las personas detenidas.

9. Los Estados deben crear y adoptar políticas penitenciarias efectivas que privilegien el mantenimiento de los vínculos familiares como un elemento esencial para la reinserción social, así como para mejorar la convivencia en detención. Esta obligación abarca fortalecer las relaciones familiares y las redes de apoyo de las personas encarceladas mediante la facilitación de las visitas o cualquier otro medio de contacto, y la inclusión de las familias y personas de confianza en el proceso de retorno progresivo a la vida en sociedad. Las medidas que se adopten en este sentido deberían incluir los ajustes razonables para facilitar la participación de las personas familiares mayores o con discapacidad, considerando sus posibilidades de desplazamiento.

10. En particular, dichas políticas orientadas al mantenimiento de los vínculos familiares deben enfocarse en: i) respetar el derecho a mantener vínculos familiares contra toda interferencia arbitraria; ii) garantizar que las personas sean alojadas en sitios de detención cercanos al hogar de sus familiares y otras personas bajo su cuidado; iii) facilitar visitas; iv) asegurar las condiciones apropiadas para la realización de visitas destinando espacios adecuados a tal fin, que sean universalmente accesibles y adecuados para personas de todas las edades; y, v) asegurar que las visitas se realicen por lo menos, con la periodicidad, modalidad y duración señalados en los reglamentos penitenciarios.

11. De manera específica, los Estados deberían reconocer en sus legislaciones y reglamentos el derecho de las personas encarceladas a ser privadas de libertad en espacios cercanos a sus familias como un derecho cuya titularidad corresponde tanto a aquellas como a sus familias. Garantizar este derecho en su doble concepción resulta fundamental para el mantenimiento de los vínculos familiares como un elemento esencial para la reinserción social, así como para proteger este lazo evitando que las familias deban afrontar grandes desplazamientos y costos económicos para mantener contacto con su familiar detenido.

12. A fin de garantizar el derecho de las personas encarceladas a ser privadas de libertad en espacios cercanos a sus familias, resulta esencial que las autoridades competentes realicen una evaluación sobre el sitio más adecuado tomando en consideración los derechos de familiares, con énfasis en el desarrollo de la vida privada y familiar, y el interés superior de la niñez. Este examen debe ser igualmente aplicado cuando deba decidirse sobre traslados posteriores a otros lugares de privación de libertad, respecto de los cuales, si no han sido solicitados por la persona detenida, se debe, en la medida de lo posible, consultarle sobre cada traslado. En todos los casos, las autoridades deberían justificar en qué criterios se basa una decisión y cómo se han ponderado los intereses de las personas detenidas y sus familias frente a otras consideraciones.

13. En el marco de las visitas, los Estados deben prohibir sin excepciones los registros intrusivos vaginales y anales a las personas visitantes. En esta línea, se deben emplear medios alternativos de registro y equipos tecnológicos no invasivos basados en el pleno respeto de los derechos humanos, así como capacitar al funcionariado para su uso.



Foto: Andrés Loor

14. En el caso particular de las visitas entre personas detenidas y sus hijas o hijos, además, los Estados deben permitir contactos directos entre aquellos, y asegurar que las prisiones cuentan con instalaciones apropiadas para reunirse que incluyan espacios amigables para niñas y niños de corta edad.

15. Los Estados deben implementar acciones para asegurar que las y los familiares de personas privadas de libertad tengan acceso a la información respecto de la situación en detención de su familiar en especial con relación al lugar de alojamiento, traslados, estado de salud, requisitos y condiciones para las visitas, y condición de incomunicación. La información debe ser prestada en un lenguaje comprensible para la familia, y ajustarse razonablemente a las necesidades cognitivas, visuales o auditivas de los integrantes de la familia. En adición, este deber abarca comunicar de manera inmediata el fallecimiento de una persona familiar detenida, sus causas e investigaciones iniciadas.

16. Los Estados tienen la obligación de prevenir, erradicar, investigar y sancionar toda forma de violencia y discriminación que enfrentan las personas familiares en su interacción con los sistemas penitenciarios. Este deber incluye proteger a las y los familiares contra todo tipo de represalias ante las denuncias realizadas.



En memoria de Maryori Charcopa Ayoví



En memoria de Maritza Martínez Quiroz










COPIAS
0969240571
CAROLINA




Exigimos que entre
la policia x q' las
masacre se buelbe a
Repetir.


EXIJIMOS
Explicaciones al
Gobierno, xq los presos
estan armados
Queremos- RESPUESTAS
En Ecuador no existe
la Pena de Muerte
JUSTICIA:
Luis Deniz
Bejarano
Queremos Ayuda
MIRA LASSO CTM REPORTATE
Danos INFORMACIÓN Hasta cuando
continuan estas masacres




Nelly

Este informe está dedicado a las familias de las personas privadas de libertad en Ecuador, y de manera especial a las madres, hijas, esposas y hermanas que históricamente han sostenido la denuncia pública frente a la incoherencia y el colapso del sistema de rehabilitación social. Han sido ellas quienes, en medio del estigma y la precariedad, han visibilizado que las formas en que el Estado gestiona el conflicto no reducen la violencia, sino que la reproducen; que la cárcel, lejos de rehabilitar, profundiza el daño a personas, familias y comunidades enteras.

Que sus voces continúen interpelando una gestión penitenciaria atravesada por prácticas necropolíticas, donde la administración de la vida y la muerte se ejerce desde el abandono y desde la voluntad de producir violencia. Que la historia registre su persistencia no como un gesto marginal, sino como un acto luminoso de defensa sostenida de la dignidad humana. Porque han sido -y son- Defensoras de Derechos Humanos, aun cuando el Estado no las nombre como tales.



CDH
COMITÉ PERMANENTE POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

Friedrich Ebert Stiftung

OMCT
SOS-Torture Network

Con el apoyo de:
Brot für die Welt